



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/49/362
6 de septiembre de 1994
ESPAÑOL
ORIGINAL: ESPAÑOL/FRANCÉS/
INGLÉS

Cuadragésimo noveno período de sesiones
Tema 97 del programa provisional

DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA LIBRE DETERMINACIÓN

Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos
humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los
pueblos a la libre determinación

Nota del Secretario General

El Secretario General tiene el honor de transmitir a los Miembros de la Asamblea General, de conformidad con la resolución 48/92 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993, el informe elaborado por el Sr. Enrique Bernalles Ballesteros (Perú), Relator Especial sobre la cuestión de la utilización de mercenarios.

Anexo

INFORME SOBRE LA CUESTIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MERCENARIOS COMO
MEDIO DE VIOLAR LOS DERECHOS HUMANOS Y OBSTACULIZAR EL EJERCICIO
DEL DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA LIBRE DETERMINACIÓN, PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

ÍNDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. INTRODUCCIÓN	1 - 6	3
II. ACTIVIDADES DEL RELATOR ESPECIAL	7 - 15	4
A. Desarrollo del programa de actividades . . .	7 - 8	4
B. Correspondencia	9 - 15	5
III. LOCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MERCENARIAS	16 - 18	13
A. Conflictos armados y actividades mercenarias	19 - 24	14
B. La cooperación de los Estados para prevenir las actividades de los mercenarios	25 - 30	15
IV. ACTIVIDADES MERCENARIAS EN ÁFRICA	31 - 53	17
A. Aspectos generales	31 - 37	17
B. Angola	38 - 43	19
C. Rwanda	44 - 51	20
D. Sudáfrica	52 - 53	22
V. PRESENCIA DE MERCENARIOS EN EL TERRITORIO DE LA EX YUGOSLAVIA	54 - 63	23
VI. PRESENCIA DE MERCENARIOS EN CONFLICTOS QUE HAN SURGIDO EN ESTADOS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA EX UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS (URSS)	64 - 77	29
A. Armenia - Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) . . .	64 - 72	29
B. Otros Estados	73 - 77	37
VII. ESTADO ACTUAL DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL RECLUTAMIENTO, LA UTILIZACIÓN, LA FINANCIACIÓN Y EL ENTRENAMIENTO DE MERCENARIOS .	78 - 79	39
VIII. CONCLUSIONES	80 - 94	39
IX. RECOMENDACIONES	95 - 105	43

I. INTRODUCCIÓN

1. La Asamblea General, por su resolución 48/92, de 20 de diciembre de 1993, entre otras cosas, condenó la persistencia en el reclutamiento, la financiación, el entrenamiento, la concentración, el tránsito y la utilización de mercenarios, así como las demás formas de apoyo a mercenarios, con el fin de desestabilizar y derrocar a los gobiernos de los Estados de África y de otros Estados en desarrollo y combatir los movimientos de liberación nacional de los pueblos que luchan por ejercer su derecho a la libre determinación (párr. 2). La Asamblea reafirmó que la utilización de mercenarios y su reclutamiento, financiación y entrenamiento son delitos que inquietan profundamente a todos los Estados y violan los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas (párr. 3).

2. La Asamblea General denunció a todos los Estados que persisten en el reclutamiento de mercenarios, lo permiten o toleran y que brindan a éstos facilidades para emprender actos de agresión armada contra otros Estados (párr. 4). Asimismo, instó a todos los Estados a que adopten las medidas necesarias y ejerzan el máximo de vigilancia contra la amenaza que entrañan las actividades de los mercenarios y a que garanticen, mediante medidas legislativas y administrativas, que su territorio y otros territorios bajo su control, así como sus nacionales, no se utilicen en el reclutamiento, la concentración, la financiación, el entrenamiento y el tránsito de mercenarios, para planificar actividades orientadas a desestabilizar o derrocar al gobierno de ningún Estado ni para combatir a los movimientos de liberación nacional que luchan contra el racismo, el apartheid, la dominación colonial y la intervención u ocupación extranjeras (párr. 5).

3. La Asamblea General exhortó a todos los Estados a que prestaran asistencia humanitaria a las víctimas de las situaciones producidas por la utilización de mercenarios, así como por la dominación colonial o foránea o la ocupación extranjera (párr. 6). Reafirmó que era inadmisible utilizar los conductos de la asistencia humanitaria y de otro tipo para financiar, entrenar y armar mercenarios (párr. 7), y exhortó a todos los Estados que aún no lo hubieran hecho, a que consideraran la posibilidad de tomar medidas inmediatas para ratificar o adherirse a la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios (párr. 8). La Asamblea solicitó al Centro de Derechos Humanos de la Secretaría la organización, dentro del marco de los recursos existentes, de reuniones de trabajo para analizar los aspectos jurídicos, políticos y filosóficos de esta cuestión (párr. 9); tomó nota con reconocimiento del informe del Relator Especial (A/48/385, anexo, párr. 1) y le solicitó que presentara a la Asamblea General durante su 50º período de sesiones, un informe sobre la utilización de mercenarios, particularmente en vista de los elementos adicionales subrayados en su informe (párr. 10).

4. La Comisión de Derechos Humanos, durante su quincuagésimo período de sesiones, examinó el 13º informe del Relator Especial (E/CN.4/1994/23) y aprobó su resolución 1994/7, de 18 de febrero de 1994, mediante la cual, entre otras cosas, reafirmó que el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios debían ser considerados como delitos que preocupaban seriamente a todos los Estados (párr. 2), e instó a todos los Estados a que impidieran que los mercenarios utilizaran alguna parte de su

territorio para desestabilizar o amenazar la integridad territorial de un Estado soberano (párr. 3), y a que cooperaran con el Relator Especial en el cumplimiento de su mandato (párr. 6). Asimismo, la Comisión pidió a todos los Estados que todavía no lo hubieran hecho, que considerasen la posibilidad de tomar medidas prontamente para ratificar la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios (párr. 4).

5. Tomando nota con reconocimiento del informe del Relator Especial y de la preocupación que en él se expresaba por el hecho de que continuaban las actividades de los mercenarios (párr. 1), la Comisión de Derechos Humanos pidió al Relator Especial que le presentara un informe sobre todos los nuevos acontecimientos relativos a la utilización de mercenarios, dondequiera que se produjeran, durante su 51º período de sesiones (párr. 5), y que formulara recomendaciones específicas sobre las medidas efectivas encaminadas a luchar contra las actividades de los mercenarios (párr. 7). Pidió también al Secretario General que proporcionara al Relator Especial toda la asistencia necesaria para el cumplimiento de su mandato (párr. 8).

6. En cumplimiento de lo dispuesto por la resolución 48/92 mencionada supra, el Relator Especial tiene el honor de presentar a la consideración de la Asamblea General su 14º informe sobre la cuestión de la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación.

II. ACTIVIDADES DEL RELATOR ESPECIAL

A. Desarrollo del programa de actividades

7. El Relator Especial viajó a Ginebra el 30 de enero de 1994 con el objeto de presentar su 13º informe (E/CN.4/1994/23) a la Comisión de Derechos Humanos, el que presentó el 2 de febrero de 1994, durante el transcurso de la cuarta sesión del 50º período de sesiones. Durante su permanencia en Ginebra el Relator Especial sostuvo consultas con representantes de diversos Estados y se reunió con miembros de organizaciones no gubernamentales. Celebró asimismo sesiones de coordinación con el Centro de Derechos Humanos, en particular respecto a la ejecución de lo dispuesto por el párrafo 9 de la parte dispositiva de la resolución 48/92 de la Asamblea General. El Relator Especial lamenta que el Centro de Derechos Humanos no haya podido dar cumplimiento a lo dispuesto en dicho párrafo por carecer de los recursos financieros y presupuestarios necesarios, según se le informó. Sin embargo, considera conveniente recomendar a la Asamblea General que insista en este punto, dada la apelación que suele realizarse a fórmulas jurídicas y procedimientos legales para disfrazar la identidad legal y la nacionalidad del mercenario, y los casos de utilización simultánea de la doble o múltiple nacionalidad. Una reunión de expertos, especialistas e interesados en el tema, conjuntamente con el Relator Especial y tomando en cuenta las categorías de análisis empleadas por éste, puede producir un avance significativo en cuanto a la precisión y el alcance de los conceptos jurídicos sobre otorgamiento de la nacionalidad y casos de doble o múltiple nacionalidad, contribuyendo así a la propuesta de soluciones destinadas a la drástica reducción de las actividades mercenarias.

8. El Relator Especial volvió a Ginebra en dos oportunidades, del 30 de mayo al 1º de junio de 1994 y del 1º al 9 de agosto de 1994, para celebrar diversas consultas, participar en la reunión de Relatores y Representantes Especiales, Expertos Independientes y presidentes de Grupos de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, que tuvo lugar del 30 de mayo al 1º de junio de 1994, y redactar el presente informe, respectivamente.

B. Correspondencia

9. En cumplimiento de lo dispuesto por la resolución 48/92 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993, y por la resolución 1994/7 de la Comisión de Derechos Humanos, de 18 de febrero de 1994, el Relator Especial envió el 29 de abril de 1994, una comunicación a todos los Estados Miembros de la Organización solicitándoles información sobre lo siguiente:

"a) Información relativa a cualquier actividad de mercenarios que, en violación de la soberanía y las leyes de su país, pudiera haber ocurrido u ocurriera en su territorio (reclutamiento, financiación, entrenamiento, reunión, traslado o utilización de mercenarios);

b) Información relativa a cualquier actividad de mercenarios en el territorio de otro país que menoscabe o pueda menoscabar la soberanía de su Estado y el ejercicio del derecho de su pueblo a la libre determinación;

c) Información relativa a cualquier actividad de mercenarios en el territorio de otro país que menoscabe o pueda menoscabar la soberanía de otros países en su subregión, región o continente y el ejercicio del derecho de otros pueblos a la libre determinación;

d) Información sobre leyes nacionales que se encuentren en vigor y tratados internacionales en los que su país sea parte relativas a la prohibición de actividades de mercenarios y su utilización como medio de violar la soberanía de otros Estados e impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación;

e) La posición de su Gobierno con respecto a la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, aprobada por la Asamblea General el 4 de diciembre de 1989;

f) Sugerencias que a juicio de su Gobierno podrían ser útiles para perfeccionar el enfoque internacional con respecto a la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos e impedir el ejercicio de los pueblos a la libre determinación."

10. El Relator Especial ha recibido respuestas de los Gobiernos de Arabia Saudita (30 de mayo de 1994), Australia (1º de julio de 1994), Austria (25 de julio de 1994), Dominica (23 de junio de 1994), Etiopía (20 de junio de 1994), Luxemburgo (20 de junio de 1994), Nepal (26 de julio de 1994), Níger (11 de julio de 1994), Panamá (5 de julio de 1994), Suecia (20 de julio de 1994), Túnez (28 de julio de 1994) y Uganda (1º de junio de 1994).

/...

11. La comunicación del Gobierno de Uganda da respuesta a todos los párrafos del cuestionario enviado. Los Gobiernos de Australia y Dominica han puesto en conocimiento del Relator Especial su legislación interna específica destinada a impedir las actividades de mercenarios. Los Gobiernos de Luxemburgo, Nepal y Níger han informado, en cambio, que no cuentan con legislación específica en sus ordenamientos jurídicos internos, por no haber surgido situaciones fácticas que hicieran necesaria la tipificación legal. Por último, los Gobiernos de Austria, Panamá y Túnez mencionan las normas de su legislación interna que, sin referirse específicamente a las actividades de los mercenarios, pueden ser aplicables a éstos.

12. Particular atención ha merecido al Relator Especial la respuesta proporcionada por el Gobierno de Túnez al inciso f) del cuestionario que se le enviara, que por su interés, el Relator Especial considera conveniente reproducir:

"(...) Con respecto a las sugerencias que puedan contribuir a perfeccionar el enfoque internacional con respecto a la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos e impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación

cabe señalar:

- Aplicación de las Convenciones de Tokio de 1963, de Montreal de 1971 y de La Haya de 1976 relativas a la lucha contra el secuestro de aviones.
- Fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo.
- Control de las operaciones de venta de armamento.
- Determinación de las fuentes financieras de las organizaciones terroristas.
- Imposición de sanciones económicas firmes a los países que auspician el terrorismo.
- Incitación a los Estados a que se nieguen a conceder pasaportes y visados a los terroristas y mercenarios.
- Prohibición absoluta de publicar avisos de reclutamiento de mercenarios.

No obstante, cabe señalar que no existe en Túnez ninguna asociación o grupo que responda a los criterios del carácter de mercenario."

13. El 4 de enero de 1994, el Gobierno de la India envió la siguiente comunicación al Relator Especial:

"La incorporación de mercenarios extranjeros en Jammu y Cachemira, parte integrante de la India, se ha intensificado en los últimos años. El Pakistán ha aumentado su programa de reclutamiento, entrenamiento,

/...

financiación y entrega de armas a mercenarios extranjeros como parte de su ofensiva en Jammu y Cachemira. Las autoridades competentes de la India han determinado en forma confiable que en connivencia con el Jamaat-E-Islami (JEI), el Pakistán ha reclutado e incorporado a mercenarios de la India que ya habían sido entrenados para luchar junto con los muyahidin afganos en el Afganistán.

Los mercenarios también están activamente asociados al entrenamiento local de terroristas en Cachemira. Hay campamentos provisionales de entrenamiento de mercenarios en bosques espesos y terrenos montañosos. Algunos de esos mercenarios tienen una asociación de larga data con grupos de terroristas en Cachemira, que se remonta a sus operaciones de entrenamiento en la frontera entre el Pakistán y el Afganistán.

Los mercenarios funcionan principalmente con grupos terroristas conocidos como 'Hizb-ul-Muyahidin' (HuM), 'Al Barq' y 'Fuerza Al Jehad'. Además, los grupos militantes Harkat-ul-Muyahidin y Harakat-ul-Jehad-e-Islami tienen un gran número de mercenarios que realizan operaciones en diversas partes del Estado.

Las características de la militancia en el valle de Cachemira y en diversos distritos de la región de Jammu han adquirido una nueva dimensión cualitativa sin precedentes a consecuencia de la presencia de unos 500 mercenarios aguerridos, bien entrenados y armados. Los mercenarios arrestados en esta región por las fuerzas de seguridad del Gobierno desde 1991 corroboran esa presencia. Desde 1990 aproximadamente 30 mercenarios extranjeros que participaban en operaciones terroristas han sido arrestados y 91 resultaron muertos mientras participaban en operaciones terroristas. Además, se dispone de pruebas documentadas incontrovertibles sobre la infiltración y presencia de mercenarios extranjeros así como de las atrocidades cometidas por ellos. Algunos mercenarios que se incorporaron en Jammu y Cachemira hasta mediados de 1992 inicialmente se utilizaban como guardaespaldas de dirigentes militantes importantes. También los utilizaban grupos terroristas para incitar sentimientos fundamentalistas.

Las actividades de los mercenarios violan la soberanía e integridad territorial de mi país. El hecho de que hubiera 14.542 incidentes de violencia terrorista en Jammu y Cachemira en los últimos cuatro años, con la consiguiente muerte de aproximadamente 2.700 inocentes civiles y numerosos actos de incesante destrucción de propiedad gubernamental y privada, demuestra la intensidad y ferocidad de la violencia terrorista en Jammu y Cachemira. Han eliminado a dirigentes políticos, trabajadores y sus familiares para impedir toda actividad política democrática; han matado a funcionarios gubernamentales para acallar al Gobierno; han intimidado a miembros del poder judicial y de la prensa para resquebrajar el sistema jurídico y el periodismo independiente; han secuestrado y matado intelectuales, educadores, periodistas y dirigentes de la comunidad para acallar la oposición. El extremismo sistemático basado en la religión por parte de elementos terroristas ha dado como resultado el éxodo de 250.000 miembros de otras comunidades religiosas del valle de Cachemira a otras partes de la India. De hecho, hasta 50.000 musulmanes también se han visto obligados a huir del valle para buscar seguridad y socorro en otras partes de la India.

/...

Las atrocidades cometidas por los mercenarios han sido injustificables e indiscriminadas. Aun las mujeres y los niños inocentes fueron víctimas de esos actos. La modalidad ha sido constante: secuestrar a una mujer y matarla después de violarla. O violarla y matarla en su propia casa en presencia de sus propios familiares y luego matarlos a todos. Observadores independientes han corroborado innumerables violaciones de los derechos humanos cometidas por mercenarios.

La incorporación de mercenarios ha dado como resultado un aumento de la intensidad y potencia de fuego de los ataques terroristas contra las fuerzas de seguridad, lo que ha ocasionado un mayor número de víctimas, de daños y de destrucción de propiedades públicas y privadas. Se confirmó que diversos incidentes de ataques concentrados contra el ejército y las fuerzas de seguridad de la frontera, que ocasionaron un gran número de bajas, habían sido planeados y ejecutados por mercenarios."

14. El 2 de febrero de 1994, el Relator Especial puso en conocimiento del Gobierno de la República Islámica del Pakistán las denuncias formuladas por el Gobierno de la India sobre actividades mercenarias en Jammu y Cachemira, a fin de que formulase los comentarios u observaciones que estimase pertinentes. El 3 de febrero de 1994, se dirigió a la Misión Permanente de la India ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra solicitándole las siguientes precisiones:

"a) Indicación, siempre que sea posible, de la nacionalidad de las personas que se describen como 'mercenarios extranjeros';

b) Información concreta sobre el Estado, los grupos de Estados o las organizaciones internacionales o nacionales que podrían promover el reclutamiento y la utilización de mercenarios;

c) Si no existiera tal conexión, información sobre la posible existencia de grupos en Jammu y Cachemira que podrían haber necesitado la utilización de mercenarios sin recurrir a una tercera Potencia;

d) Información para determinar si dichos mercenarios actúan a título personal, como bandas organizadas por sí mismas o en conjunción con grupos armados o fuerzas regulares y, en este último caso, una indicación del país al que pertenecen dichas fuerzas;

e) Información sobre el tipo de actividades ilegales que realizan: entrenamiento, ataques contra la población civil, secuestros, sabotaje de instalaciones civiles, torturas, asesinatos y otras actividades que afecten los derechos humanos;

f) Información sobre la financiación de los mercenarios, con una indicación de la cantidad de remuneración que reciben, quién la otorga y en qué condiciones;

g) Estado de los detenidos que se supone que son mercenarios (30) y los acusados de actividades terroristas, así como su nombre, número y nacionalidad, información sobre si todavía se encuentran arrestados y la situación de cualquier proceso jurídico iniciado contra ellos. Asimismo,

/...

en relación con otra parte de su comunicación, una descripción de las pruebas documentales que haya sido posible reunir sobre la presencia en Jammu y Cachemira de ciudadanos extranjeros que han sido utilizados como mercenarios."

15. La Misión Permanente del Pakistán ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, mediante nota verbal de 13 de julio de 1994, dio respuesta a la comunicación del Relator Especial expresando lo siguiente:

"a) El Pakistán condena la utilización de mercenarios para desestabilizar a los gobiernos y luchar contra los movimientos de liberación nacional de los pueblos que luchan por su derecho a la libre determinación;

b) Es inconcebible que el Pakistán permita cualquier actividad mercenaria en su territorio. El Pakistán siempre ha condenado actos de esa naturaleza en forma inmediata e inequívoca. Desde 1980 el Pakistán ha presentado resoluciones en la Tercera Comisión de la Asamblea General en que condena la utilización de mercenarios;

c) Por otra parte, es lamentable que en las proximidades de nuestro país hayan continuado las actividades de los mercenarios sin interrupción durante 46 años en el territorio disputado de Jammu y Cachemira. En los últimos años, las acciones de los mercenarios iniciadas por el Gobierno de la India han alcanzado un nivel sin precedentes;

d) En agosto de 1947, el Pakistán y la India obtuvieron su independencia de conformidad con un plan de partición previsto en la Indian Independent Act (Ley de independencia de la India) de 1947. Como parte del plan de partición, todas las regiones de mayoría musulmana debían integrar el Pakistán y todas las regiones de mayoría hindú debían incorporarse a la India. Se dio asesoramiento semejante a los gobernantes de más de 560 estados de la India. Así pues, el estado de Jammu y Cachemira, con una mayoría musulmana del 77% (censo de 1941), debería haber correspondido al Pakistán. Sin embargo, el Rajá de Cachemira, en forma fraudulenta incorporó dicho estado a la India el 26 de octubre contra los deseos del pueblo de Cachemira. El renombrado historiador Alastair Lamb, en su libro Cachemira: A disputed Legacy, 1846-1990 abordó en detalle la cuestión de la incorporación de Cachemira a la India. Concluyó que el instrumento de accesión no era válido y era producto de la manipulación del Gobierno de la India;

e) El 1º de enero de 1948 la India planteó la cuestión de Cachemira ante el Consejo de Seguridad. En consecuencia, mediante una resolución del Consejo de Seguridad, el 20 de enero de 1948 se creó la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán. El Consejo de Seguridad aprobó otra resolución el 21 de abril de 1948, en la que se preveía la celebración de un plebiscito en Jammu y Cachemira para determinar el futuro estatuto del estado;

f) Tras realizar un estudio de la situación, la Comisión aprobó una resolución el 13 de agosto de 1948, que contenía propuestas para una orden de cesación del fuego, un arreglo de tregua y una reafirmación del deseo de

que se celebrara un plebiscito en Cachemira. La Comisión decidió que designaría observadores militares para supervisar la observancia de la orden de cesación del fuego. La resolución de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la India y el Pakistán, de 13 de agosto de 1948, fue aceptada por la India y el Pakistán;

g) Dicha Comisión envió sus recomendaciones finales sobre el plebiscito a la India y el Pakistán el 11 de diciembre de 1948. Ambos Gobiernos aceptaron las propuestas de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán (CNUIP) y las recomendaciones de dicha Comisión fueron ulteriormente aprobadas en la resolución de la CNUIP de 5 de enero de 1949. En dicha resolución, entre otras cosas, se preveía:

- i) Que la cuestión de la incorporación del estado de Jammu y Cachemira a la India o al Pakistán se decidirá mediante el método democrático de un plebiscito libre e imparcial;
- ii) Que el Secretario General de las Naciones Unidas de acuerdo con la Comisión designará un Administrador del plebiscito;
- iii) Que después de cumplidas las partes I y II de la resolución de la Comisión del 13 de agosto de 1948, y una vez que quede comprobado a satisfacción de la Comisión que se han restablecido condiciones pacíficas en el estado, la Comisión y el Administrador del plebiscito determinarán en consulta con el Gobierno de la India el destino definitivo de las fuerzas armadas de la India y del Estado, debiendo tenerse debidamente en cuenta para dicho destino la seguridad del Estado y la libertad del plebiscito;
- iv) La repatriación de los refugiados que participen en el plebiscito;
- v) El restablecimiento de los derechos políticos y humanos para asegurar un plebiscito democrático;
- vi) La desmilitarización preparatoria para el plebiscito;
- vii) La certificación de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán a fin de determinar si el plebiscito ha sido libre e imparcial;
- viii) Que los Gobiernos de la India y el Pakistán convengan también en que el Secretario General de las Naciones Unidas, de conformidad con los dos Gobiernos, designe un representante de las Naciones Unidas que tendrá la autoridad de interpretar el acuerdo convenido entre las partes y de ejecutar el plan de la reducción y redistribución de las fuerzas armadas. Además, el Representante de las Naciones Unidas deberá poner sus buenos oficios a disposición del Pakistán y de la India para llegar a una solución duradera de la cuestión de Cachemira;

h) El Consejo de Seguridad aprobó las resoluciones de 1951 y 1957, con lo que reafirmó el derecho a la libre determinación del pueblo de Cachemira. La disputa de Cachemira sigue estando incluida en el orden del día del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así pues, continúa la ocupación ilegal por la India de Jammu y Cachemira;

i) Tras años de represión por parte de las fuerzas de ocupación de la India, en 1990 el pueblo de Cachemira se levantó para exigir su derecho inherente a la libre determinación. Este movimiento es resultado de la constante negativa al pueblo de Cachemira del derecho a la libre determinación. La legitimidad de la lucha del pueblo de Cachemira procede de su derecho reconocido y frustrado a la libre determinación. Este derecho fue reconocido en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dichas resoluciones son tan válidas hoy como hace 40 años. El principio fundamental de la libre determinación que las Naciones Unidas, el Pakistán y la India y toda la comunidad internacional han prometido al pueblo de Cachemira no está sujeto a prescripción. Dicho pueblo se ha levantado para asegurar el derecho a la libre determinación, que se les ha negado durante decenios;

j) Desde 1990, Jammu y Cachemira ha estado sujeto a leyes represivas como la Disturbed Areas (J & K) Special Power Act (Ley de Poder Especial en Areas de Disturbios (J y K)), en que se prevén los arrestos, la interrogación y detención de civiles por un período de hasta cuatro años sin la posibilidad de recurrir a los tribunales. El ejército mercenario de la India durante los cuatro últimos años ha matado despiadadamente y a sangre fría a más de 40.000 habitantes inocentes de Cachemira. Miles de personas más han resultado mutiladas y lisiadas. Aún ahora miles de personas languidecen en campos de concentración y celdas inhumanas de tortura. Cientos de sus dirigentes - intelectuales, estudiosos de la religión, médicos e ingenieros - han sido asesinados o detenidos en la cárcel;

k) Las fuerzas de seguridad de la India cometen actos deliberados y sistemáticos de represión contra los inocentes habitantes de Cachemira. Grupos internacionales de derechos humanos han catalogado los relatos gráficos y los actos de brutalidad de la India en Cachemira. Lamentablemente, es en la 'democracia más grande del mundo' donde se mata o se mutila a hombres, mujeres y niños inocentes con total impunidad aplicando leyes draconianas. La represión brutal y en gran escala del pueblo de Cachemira con el objeto de suprimir su derecho a la libre determinación significa la peor forma de actividad mercenaria;

l) El Pakistán presta apoyo moral, político y diplomático al pueblo de Cachemira, que lucha por su derecho a la libre determinación. No le prestamos apoyo militar. En ese contexto, quisiéramos pedir al Representante Especial sobre la cuestión de la utilización de los mercenarios que visitara Jammu y Cachemira para verificar ese hecho;

m) En abril de 1990, en respuesta a acusaciones de injerencia formuladas por la India, el Ministro de Relaciones Exteriores del Pakistán propuso a su homólogo de la India que se establecieran observadores neutrales en la Línea de Control en Cachemira para vigilar e investigar las

acusaciones de injerencia. El Pakistán ha ofrecido en repetidas ocasiones este mecanismo que la India, a su vez, en repetidas oportunidades ha rechazado, lo que manifiesta la intención de propaganda de sus acusaciones;

n) El Pakistán está dispuesto a facilitar visitas de periodistas extranjeros, parlamentarios, observadores y organizaciones de derechos humanos a las regiones situadas a lo largo de la frontera y en la Línea de Control. El Pakistán ha cursado invitaciones a grupos de los medios de difusión para que envíen representantes a Azad Cachemira y al Pakistán. Se han enviado invitaciones similares a Amnistía Internacional, Asia Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos y otras organizaciones de derechos humanos;

o) El Pakistán ya ha facilitado la observación de Cachemira por la comunidad internacional por conducto del Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en la India y el Pakistán, emplazado en Azad Cachemira, mientras que la India siempre se ha negado a hacerlo con respecto a su lado de la Línea de Control;

p) La India no sólo ha iniciado acciones mercenarias en el territorio en disputa de Jammu y Cachemira, sino que también ha procurado desestabilizar el Pakistán mediante el entrenamiento y la financiación de mercenarios en la provincia de Sindh del Pakistán. La India ha promovido sistemáticamente a elementos subversivos y terroristas en Sindh. Se establecieron bases entre Rajisthan y Barmer para entrenar a los mercenarios;

q) Entrenamiento de saboteadores: Las autoridades de la India han establecido 36 campamentos (19 de ellos están situados en Rajisthan y Gujrat y abarcan a Sindh) para el entrenamiento de saboteadores con el objetivo final de enviarlos al Pakistán a fin de que realicen actividades de subversión y terrorismo. Dichos saboteadores en general proceden de organizaciones y elementos antipakistaníes. Algunos de los detalles se consignan a continuación:

- i) Establecimiento 22. Una celda especial conocida como el Establecimiento 22 con sede en Bachiya Bagh (Kalsi) cerca de Dehradun ha estado impartiendo entrenamiento terrorista desde 1986 para la ejecución de actividades subversivas y terroristas dentro del Pakistán;
- ii) La Oficina del Antiguo Fuerte. Otra Oficina de la RAW situada en Jaipur en un antiguo fuerte ubicado en el camino a Ajmer también imparte entrenamiento terrorista;
- iii) Número de incidentes y bajas. En los siete últimos años (hasta mayo de 1994), agentes patrocinados o entrenados por la India fueron responsables de 219 incidentes de terrorismo en el Pakistán, que ocasionaron la muerte de 462 personas y heridas a 1.744."

III. LOCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MERCENARIAS

16. La existencia de la Naciones Unidas es consustancial a la igualdad soberana, la independencia política y la integridad territorial de los Estados, así como al respeto a la libre determinación de los pueblos. En este contexto y a lo largo de su desarrollo como entidad encargada de preservar la paz internacional, las Naciones Unidas han proclamado como un principio básico de las relaciones internacionales, la abstención a la amenaza o al uso de la fuerza, promoviendo más bien la amistad y la cooperación entre los Estados. Sensiblemente, estos propósitos se han estrellado en varias ocasiones con situaciones de conflicto armado que no sólo han afectado la paz en una región determinada, sino lesionado gravemente derechos fundamentales como la vida, la libertad, la integridad física y la seguridad de las personas y de los pueblos. Estos conflictos armados producidos a lo largo de la segunda mitad de este siglo XX, han constituido la principal preocupación de los órganos de la Organización.

17. Uno de los elementos a los que se suele recurrir cuando estallan conflictos armados, es el empleo de mercenarios que violan los principios de la igualdad soberana, la independencia política, la integridad territorial de los Estados y la libre determinación de los pueblos. La actividad de los mercenarios es intrínsecamente ilícita; a través de ella se lesionan derechos sustantivos y se perpetran actos violentos que son contrarios al orden constitucional de los Estados y que también contribuyen a que sea más cruel e intenso el conflicto armado. La intervención de mercenarios se produce, precisamente, para potenciar la capacidad militar de alguna o todas las partes involucradas en un conflicto armado. Las Naciones Unidas, conscientes de lo que significa la presencia de mercenarios, han calificado estas actividades como delitos graves que inquietan profundamente a todos los Estados. Esta preocupación consta en reiteradas resoluciones de los órganos de las Naciones Unidas y principalmente en la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. Esta Convención, aprobada el 4 de diciembre de 1989, se encuentra en proceso de ratificación y adhesión para su entrada en vigor. En África rige la Convención sobre la Eliminación del Mercenarismo, adoptada por la Organización de la Unidad Africana (OUA).

18. Es un hecho lamentable que a pesar de estas disposiciones, la tendencia es a la continuación y ampliación de actividades internacionales ilícitas en las que intervienen mercenarios que perpetran actos violentos con los que afectan vidas, producen daños materiales, dañan la economía y practican atentados que, en más de un caso, han tenido como consecuencia desatar o agravar conflictos, con repercusiones que han sido catastróficas para los pueblos que los han sufrido. En esta condenable práctica, los mercenarios no se involucran por razones altruistas y los alegatos ideológicos que suelen formular son pretextos para ocultar la verdadera y principal motivación, que es el dinero. La actividad mercenaria es pagada; se atenta y se mata por lucro, en un país o en un conflicto ajeno a la nacionalidad del mercenario contratado. De acuerdo a los antecedentes estudiados por esta Relatoría, el mercenario es contratado porque se trata de un experto, de una persona fría y deshumanizada que ha convertido la guerra en un oficio que le permita ganar y vivir con un ingreso alto. Suelen adoptar ideologías extremistas, altamente radicales e intolerables, que le sirven para justificar actividades criminales, contrarias a

los más elementales derechos de la persona humana y de los pueblos agredidos por estos actos.

A. Conflictos armados y actividades mercenarias

19. Los conflictos armados, internos o internacionales, y la existencia de profesionales de la guerra, cuya situación ocupacional ha desmejorado o no responde a sus expectativas sociales, políticas o económicas, son por lo general los factores que se combinan para que surja una oferta organizada de entes privados o de cuerpos públicos que desarrollan una actividad ilícita en tanto que reclutan personal y lo convierten en mercenarios al encargarles la comisión de hechos siniestros. Estas personas se mercenarizan al aceptar involucrarse en un conflicto armado a cambio de una paga, sin perjuicio de la tolerancia para la comisión de actos crueles o de pillaje que también le pueden reportar beneficios económicos adicionales. Por lo demás, el mercenario puede actuar aun en casos en que no existe conflicto armado, prestándose a realizar actos criminales por cuenta de una Potencia o un grupo, interesados en generar perjuicios en otro país, sin que puedan ser señalados como responsables. También pueden darse casos en que es la propia autoridad de un Estado o un grupo opositor o de resistencia interna quienes ilícitamente los contratan, para realizar acciones prohibidas por la legalidad existente, como por ejemplo, constituir una fuerza paramilitar de represión, organizar un escuadrón de la muerte, etc.

20. En la perspectiva descrita, el mercenario, cualquiera sea su nacionalidad, suele ofertar sus servicios o está disponible a que se tome contacto con él. Las organizaciones que se dedican al reclutamiento de este tipo de personas, trabajan a su vez con agentes gubernamentales o con grupos que son parte en un conflicto, facilitando la conexión y el establecimiento de una asociación criminal entre quien contrata y el contratado. En algunos casos, se recurre a fórmulas jurídicas que ocultan la naturaleza del encargo o que le facilitan al mercenario aparecer como nacional del país en cuyo conflicto armado se involucra. Aunque la apelación a una fórmula de este tipo disfraza la condición real de mercenario, el origen de la relación contractual, la paga, el tipo de servicios pactados, el uso simultáneo de otras nacionalidades y pasaportes, etc., sirven como pistas para establecer la nacionalidad verdadera de las personas involucradas en un conflicto armado, sobre la cual existen sospechas fundadas de ser un mercenario.

21. La localización de hechos concernientes a actividades mercenarias ilustrada por el Relator Especial en sus informes precedentes, acredita que el recurso a mercenarios se presenta habitualmente en relación con un conflicto armado internacional o interno, cuando alguna de las partes en conflicto, o todas, apelan al recurso mercenario para la realización de su estrategia militar. Aun cuando las actividades mercenarias de tipo masivo se presentan hoy en día en diversos conflictos armados, debido al crecimiento objetivo de la oferta para este tipo de actividades, la reaparición contemporánea del mercenario se dio en conflictos armados surgidos a propósito del derecho a la libre determinación de un pueblo. Desde los años 1960 y en el contexto de la descolonización de África, la activa presencia de bandas de mercenarios se presentó como un recurso de los intereses coloniales que querían permanecer en la región, afectándose el proceso de libre determinación del que emergía un nuevo Estado africano o promoviéndose situaciones de desestabilización bélica en las que el ingrediente

/...

mercenario era fundamental para la intensificación del conflicto armado y su internacionalización.

22. Existen casos complejos en los que la presunción de actividades mercenarias en conflictos internos es señalada por fuentes de la prensa internacional y analistas especializados, pero tales hechos son sin embargo cubiertos por un silencio persistente, o son negados, cuando se solicita información de fuentes oficiales. El Relator Especial señala esta dificultad objetiva que impide verificar la presencia de mercenarios en conflictos internos, a pesar de las evidencias registradas internacionalmente. Algunos conflictos en los que se señala la presencia de un componente mercenario, son los del Afganistán, el Chad, Myanmar, Rwanda y el Sudán, entre otros.

23. Habitualmente, los mercenarios son antiguos combatientes identificados compulsivamente con el oficio de hacer la guerra, aparentan ser practicantes fanáticos de una opción ideológica y suelen ser personas intrínsecamente intolerantes o violentas. Pero el factor agravante es que su participación está ligada a los aspectos más cruentos de un conflicto y a las acciones más criminales en contra de los derechos humanos. Por lo demás, la lógica crematística y de ganancias ilícitas por pillajes que se dan en torno a su participación, pueden ser determinantes para que, por su parte, un conflicto tenga una larga duración. El interés de un mercenario no radica en la paz y en la reconciliación, sino en la guerra, porque ése es su negocio, de eso vive.

24. Las actividades a que se hace referencia en el presente capítulo pueden ser realizadas por nacionales en su propio país, pero en este caso no se trataría de actividades mercenarias propiamente, sino de hechos perseguibles como delitos de acuerdo a la tipología penal establecida en las correspondientes legislaciones internas. Pero el tipo penal cambiaría si para esas mismas actividades, se contratara a expertos extranjeros que, ilícitamente, formaban el cuerpo de seguridad o la guardia personal de una autoridad pública o el escuadrón de la muerte organizado por un particular o un grupo privado. La condición de extranjero es, de acuerdo a la normatividad internacional sobre la materia, un elemento indispensable para la calificación de un delincuente como mercenario. No obstante, es preciso advertir que traficantes de drogas, de armas, terroristas y mercenarios suelen actuar como bandas internacionales interconectadas entre sí. Así, un grupo armado irregular que practica el terrorismo puede rápidamente convertirse en grupo mercenario al desplazarse a un territorio de un Estado limítrofe para cubrir y otorgar protección a una banda de narcotraficantes, o para ocupar una porción de territorio extranjero sustrayéndolo a la autoridad del Estado soberano.

B. La cooperación de los Estados para prevenir las actividades de los mercenarios

25. De acuerdo con las resoluciones que se refieren a su mandato, esta Relatoría ha profundizado en el estudio del problema que plantea a la comunidad internacional la actividad de los mercenarios y ha reunido información que sea útil al conocimiento del tema y a la formulación de políticas encaminadas a prevenir y a luchar contra las actividades de los mercenarios.

26. La primera cuestión que fluye del conocimiento del tema es que la presencia de mercenarios es una actividad recurrente que puede plantearse en cualquier parte del mundo. Si bien es cierto que son algunos países africanos los que en décadas recientes más han sufrido la acción criminal de agentes mercenarios, no debe generalizarse un equívoco según el cual sólo en África hay mercenarios. La realidad permite comprobar que cualquier país puede ser víctima de acciones de mercenarios. Por otra parte, éstos provienen de diversos países; no están orgánicamente ligados a ningún Estado, aunque hay casos en que se establecen asociaciones transitorias con órganos de inteligencia que recurren a mercenarios o a las organizaciones que los reclutan y entrenan, para ejecutar actos de sabotaje y de hostilidad contra un tercer Estado, con la intención de que no pueda atribuirse la responsabilidad de la agresión al país que realmente está detrás de ella.

27. Una segunda cuestión es que se dan situaciones de vacío y resquicio legal que permiten en algunos países la existencia de asociaciones jurídicamente registradas que ofrecen libremente contratos a personas que quieran trabajar como mercenarios, sin que las promociones, publicidad y suscripción de estos contratos sean considerados como hechos en sí ilegales y perseguibles. El resquicio legal en estos casos consiste en que la ley permite el libre funcionamiento del mercado y la libre contratación. Quien contrata a una persona para que se convierta en mercenario, sólo es un intermediario que no estaría cometiendo un acto en sí mismo ilegal y delictivo, porque no necesariamente el mercenario va a recibir dinero para cometer un delito, éste no se cometerá en el lugar donde se efectuará la acción criminal y las leyes del país no considerarían además la figura del mercenario como un tipo autónomo que asocia inevitablemente el nombre y la suscripción de un contrato, con la comisión de un delito penado. Esta situación obliga a tener una cuidadosa información y seguimiento de las actividades de mercado relacionadas con la contratación de personas para servicios no especificados, que significan un tráfico al final del cual hay un daño objetivo en un territorio distinto de aquel donde se hizo el contrato, que afecta la soberanía de un tercer Estado, la vida de las personas, la economía y la libre determinación.

28. En tercer lugar, los mercenarios son por lo general personas que han pertenecido a las fuerzas armadas regulares de un país, que como tales han participado en conflictos militares. Es decir, tienen oficio para hacer la guerra y se les busca precisamente para eso. En esta perspectiva, la desocupación que sobreviene al ser repatriados y retirados de las fuerzas regulares y ciertas alteraciones en la personalidad fruto de la guerra, pueden ayudar a su conversión en mercenarios. No obstante, este peligroso extremo podría tenerse bajo control, si los Estados acordasen una política de prevención, intercambio de información, seguimiento y atención a este tipo de personas que han desarrollado una tendencia favorable a conductas agresivas. Es posible aplicar una política de empleo y atención sicosocial a personas con problemas que son secuela de su participación en las guerras y es posible también que desde el Estado se establezca el marco legal para la actuación de asociaciones de ex combatientes, de tal modo que no se permita llegar a extremos de culto a la guerra, proclividad a la intolerancia y a la adopción de ideologías que cultivan la violencia y el intervencionismo militar.

29. Un cuarto aspecto tiene que ver con actividades ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de personas, de armas, el contrabando, el terrorismo,

/...

etc. Por lo general, estos actos se dan en relación con conflictos militares o se expresan como ilícitos autónomos. En ambas modalidades, lo que está probado es que estas bandas tienen necesidad de un componente militar, que sirven para misiones de seguridad, traslado de mercaderías, manejo de aeronaves y eventualmente, enfrentamientos con fuerzas del orden regulares que sirven a la soberanía del Estado víctima de estos actos ilícitos. Es por tanto interés de los Estados el evitar que se formen o que actúen bandas de mercenarios en su territorio, dar leyes que tipifiquen el delito de mercenarismo y que se reprima legalmente la actividad mercenaria. Tratándose de ex militares o ex policías, esa condición debería ser considerada como un agravante de la pena.

30. Por último, y con cargo a continuar la profundización del tema, debe evitarse la apología del mercenario en los medios de comunicación y cualquier equívoco sobre este comportamiento humano. El mercenario no es un héroe ni el último guerrillero romántico, sino un delincuente cuyos actos están asociados a los crímenes más viles contra la vida. El Estado y la sociedad deben advertir, prevenir y sancionar penal y moralmente al mercenario. Pero también, la legislación nacional debe ser muy severa contra la prestación de servicios estatales, como los de inteligencia, o de autoridades con proclividades represivas o asociaciones particulares de inspiración totalitaria que acudiendo a los mercados de oferta de mercenarios, contratan a individuos con los que formarán guardias pretorianas, escuadrones de la muerte o grupos operativos dedicados a la represión política, al asesinato de adversarios políticos o religiosos, y otros. Esta actividad, por desgracia, existe en el mundo contemporáneo, ligada a la presencia de mercenarios extranjeros.

IV. ACTIVIDADES MERCENARIAS EN ÁFRICA

A. Aspectos generales

31. Son los países africanos los que más directamente han sufrido la presencia de mercenarios en sus territorios. Las actividades de éstos han tenido principalmente el objeto de impedir, alterar o afectar de algún modo el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos. También se han registrado este tipo de actividades en hechos político-militares destinados a afectar la estabilidad de gobiernos constitucionales de la región.

32. En el curso de los últimos 20 años, varios jóvenes de países africanos sufrieron atentados contra la libre determinación de sus pueblos, la integridad territorial de sus Estados y la estabilidad de sus gobiernos constitucionales, en los que fueron expresamente contratados agentes mercenarios que actuaron con extrema crueldad, en detrimento de derechos fundamentales de las poblaciones afectadas. Angola, Benin, Botswana, las Comoras, Lesotho, Mozambique, Namibia y Zimbabwe son países que sufrieron agresiones mercenarias que tuvieron como objetivo impedir la libre determinación, obstaculizar a gobiernos establecidos y someterlos al control de una Potencia regional. El componente racista y el respaldo al sistema del apartheid ha sido otro de los elementos característicos principales de las actividades mercenarias en estos países.

33. Luego de largos años de conflicto bélico, algunos de los países más afectados por la violencia armada han iniciado procesos de negociación política conducentes al establecimiento y la ejecución de acuerdos de paz, auspiciados

/...

por las Naciones Unidas y por la Organización de la Unidad Africana (OUA). El Acuerdo de Paz, de 4 de octubre de 1992, suscrito en Roma entre el Presidente Joaquim Chissano y el jefe de la Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO), Afonso Dhlakama, puso fin al cruento conflicto de 17 años en Mozambique, estableciendo una cesación del fuego supervisada por los observadores militares de la Operación de las Naciones Unidas en Mozambique (ONUMOZ), el desarme, la concentración y desmovilización general de las fuerzas enfrentadas, la posterior organización de elecciones presidenciales y legislativas, actualmente previstas para octubre de 1994, y la creación de un nuevo ejército nacional.

34. El Acuerdo de Paz de Cotonu, Benin, suscrito el 25 de julio de 1993, puso fin al sangriento conflicto de más de tres años y medio que tuvo lugar en Liberia y que ocasionó más de 100.000 muertes. El Acuerdo de Paz establece una cesación del fuego, que entró en vigor el 1º de agosto de 1993, la concentración y posterior desarme y desmovilización de las fuerzas enfrentadas, y la supervisión internacional de estos procesos a cargo del Grupo de Verificación de la Cesación del Fuego (ECOMOG) y de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Liberia (UNOMIL), establecida el 22 de septiembre de 1993. En 1994 deberán celebrarse en el país elecciones presidenciales y legislativas.

35. Por otra parte, el Acuerdo de Paz firmado el 4 de agosto de 1993 en Arusha, República Unida de Tanzania, que tenía por objeto terminar el conflicto que afectaba al entonces Gobierno de Rwanda y a las fuerzas del Frente Patriótico Rwandés (FPR), no funcionó, derivando de ello el catastrófico enfrentamiento interno con características de genocidio que estalló en abril de 1994.

36. En los últimos años África ha sido afectada por situaciones de inestabilidad política casi siempre acompañadas de violencia armada. Los casos de Burundi, Camerún, Chad, Djibouti, Níger y Togo fueron mencionados en anteriores informes del Relator Especial. A ellos debe añadirse con marcada preocupación la grave situación en Somalia, donde la guerra entre clanes y subclanes determinó el derrumbe institucional del Estado y forzó a una intervención humanitaria de las Naciones Unidas; en el Sudán, país donde la guerra civil ha afectado profundamente las más elementales condiciones de vida de su población; en fin, en el Zaire, donde grupos militares y paramilitares que dependían directamente de la autoridad del Presidente cometieron actos de pillaje, excesos represivos y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La falta de democracia, la perpetuación en el poder de gobernantes que concentran para sí toda la autoridad, imponiéndose por medio de la represión política, el control o la supresión de las libertades ciudadanas y la militarización del país, afectan a varios Estados africanos. En este contexto de inestabilidad política, es el futuro de los Estados el que comienza a perder viabilidad. Desorden, corrupción, anomia, entre otras cosas, configuran entonces situaciones de inestabilidad en las que no resulta extraño que guardias pretorianas formadas por mercenarios, en ocasiones el servicio de intereses foráneos o neocolonialistas, sustituyan a las fuerzas y aparatos regulares, encargadas del orden y la seguridad, como aparatos del Estado.

37. Los conflictos mencionados afectan los derechos humanos de la población y dificultan la puesta en práctica de acciones en favor del desarrollo. El ingrediente de la presencia de mercenarios en los casos en que este factor concurre, no hace más que agravar el sufrimiento de estos pueblos. La comunidad internacional debería reflexionar sobre los antecedentes y trayectoria usual de

los conflictos en África y procurar rápidos y efectivos acuerdos que garanticen el derecho a la libre determinación, las libertades fundamentales, la democracia y el desarrollo para todos los pueblos que a pesar de la independencia adquirida hace varios años, no logran acceder a una paz con justicia y desarrollo, por causa, principalmente, de la violencia, de los intereses foráneos y de los conflictos armados.

B. Angola

38. Fracasados los Acuerdos de Paz suscritos el 31 de mayo de 1991, durante el primer semestre de 1994 la situación en Angola no ha dejado de deteriorarse y agravarse. El Gobierno controla las ciudades de Luanda, Lobito, Lubango, Cubal, Sumbe, Benguela y Namibe; es decir, básicamente la costa y el control de los recursos petrolíferos. Sin embargo, Cuito y otras ciudades del interior son controladas por la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA). Huambo ha sido tomada por las fuerzas rebeldes. Las informaciones recibidas se refieren especialmente a dos hechos graves: la profusión de armas sofisticadas y la activa presencia de mercenarios que nuevamente están entrenando tropas y combatiendo en el país.

39. El control de las provincias orientales del país por parte de la UNITA, habría facilitado la llegada a Angola de mercenarios provenientes de Zaire para combatir al lado de las fuerzas rebeldes. En vuelos clandestinos procedentes de Durban y Johannesburgo y con destino a Mucusso y Jamba se habrían transportado también mercenarios, armas y equipamiento militar. El entonces jefe de las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica, General Georg Meiring, confirmó el 11 de septiembre de 1993 que miembros de las fuerzas especiales de elite y antiguos miembros de los servicios de inteligencia sudafricanos estaban recibiendo ofertas de reclutamiento para combatir en Angola como mercenarios. Se ofrecía a los candidatos contratos de un año de duración y una remuneración mensual de 10.000 dólares de los EE.UU. El General Meiring recordó el carácter ilegal de estos contratos y advirtió que perseguiría judicialmente a los responsables.

40. La UNITA ha denunciado, por su parte, que el Gobierno de Angola habría reclutado más de 3.000 mercenarios, principalmente sudafricanos y namibianos, algunos de los cuales trabajarían como pilotos en las fuerzas armadas gubernamentales. Cuatro mercenarios, reclutados por la compañía sudafricana de seguridad Executive Outcomes, fueron capturados por miembros de la UNITA el 27 de julio de 1994, en la provincia oriental de Lunda. El Vicepresidente de Sudáfrica, Sr. Thabo Mbeki, informó que su Gobierno había exhortado a los dirigentes de la UNITA a no ejecutar la condena a muerte a los mercenarios capturados, emitida por el jefe militar Arlindo Chena Pena "Ben Ben".

41. La guerra civil en Angola ha arruinado las posibilidades políticas y económicas de este país, y ha provocado un grave deterioro de las condiciones de vida que amenaza al conjunto de la población angoleña. Se estima en más de 200.000 el número de personas muertas durante 1993 y 1994 por razón de los enfrentamientos militares, los actos de sabotaje, la falta de alimentos, las infecciones y la carencia de medicamentos y atención médica oportuna en los hospitales. Por otra parte y a pesar de las sanciones decretadas por la resolución 864 del Consejo de Seguridad contra la UNITA, el nivel del enfrentamiento militar no ha disminuido. La resolución 864, adoptada por

unanimidad el 15 de septiembre de 1993, bajo los términos del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, establece un embargo de armamento, material de guerra y petróleo aplicable a las fuerzas de la UNITA, embargo que entró en efecto el 26 de septiembre de 1993.

42. La compra de armas, el entrenamiento militar sofisticado en el exterior y la presencia de técnicos y expertos en estrategias militares, son hechos que contribuyen al incremento de la guerra y a que ninguna de las partes enfrentadas tenga previsiones para poner inmediato fin a la guerra por una vía de negociación. Desde luego en este contexto la presencia de mercenarios, provenientes de Sudáfrica, Namibia y Zaire, principalmente, es uno de los factores del agravamiento e inclemencia del conflicto, correspondiendo a la UNITA la responsabilidad esencial de haberse vinculado desde el comienzo de la guerra civil, hace 19 años, con mercenarios extranjeros, a los que ha utilizado tanto para entrenamiento de sus efectivos como para acciones de guerra.

43. El 15 de noviembre de 1993 se iniciaron negociaciones de paz entre las dos partes en conflicto en Lusaka, Zambia, bajo la mediación de las Naciones Unidas a través del Representante del Secretario General, Sr. Alioune Blondin Beye. Estas negociaciones lograron la concertación de un acuerdo de cesación del fuego el 3 de diciembre de 1993. Pero se trató de algo efímero, pues a pesar de las conversaciones de paz patrocinadas por las Naciones Unidas, la lucha se ha intensificado. El Presidente de Sudáfrica, Sr. Nelson Mandela, ha formulado una nueva iniciativa de paz y convocó, el 7 de julio de 1994, una reunión de altos dirigentes de los países del Sur de África. Sin embargo, en el mes de julio de 1994, el Gobierno lanzó una ofensiva contra las zonas en poder de los rebeldes, en la cordillera central y en la zona norte, mientras que la UNITA bombardeó ciudades controladas por el Gobierno. Así las cosas, la ayuda internacional alimentaria y de salud se ve seriamente afectada, estando en peligro la vida de 2 millones de angoleños. Esta situación, donde los mercenarios proporcionan entrenamiento militar y cometen sabotajes, bloqueos y atentados, merecería un papel más activo de las Naciones Unidas y de los países de la subregión en las negociaciones por la paz.

C. Rwanda

44. Al presentar y comentar los aspectos generales de las actividades mercenarias en África, el Relator Especial se refirió en sus informes a la Asamblea General y a la Comisión de Derechos Humanos, correspondientes a los años 1992, 1993 y 1994, a la situación de guerra civil que había afectado las condiciones de vida de la población de Rwanda, sometiéndola a un constante riesgo. Como se sabe, el planteamiento de la Relatoría Especial es que la inestabilidad política y los conflictos militares en diversos países de África han propiciado que una o todas las partes en un conflicto, o terceros Estados que especulan con posibles ventajas en el debilitamiento de la soberanía de esos Estados, apelen al uso de mercenarios a los que encargan las misiones más crueles y criminales de esos conflictos, afectándose así la libre determinación y los derechos humanos del pueblo víctima del conflicto. Adicionalmente, en su reciente informe a la Comisión de Derechos Humanos el Relator Especial se refirió más específicamente a la situación de Rwanda señalando que el Acuerdo de Paz firmado el 4 de agosto de 1993 en Arusha, República Unida de Tanzania, podía

poner fin al conflicto que oponía al Gobierno rwandés con las fuerzas rebeldes del Frente Patriótico Rwandés (FPR) (E/CN.4/1994/23, párr. 33).

45. El conflicto civil en Rwanda tiene sus orígenes en la represión ejercida por los Hutus, etnia mayoritaria que constituye el 80% de la población, contra la etnia Tutsi, desde la independencia del país. Miles de Tutsis fueron masacrados en 1959, 1963, 1966 y 1973, matanzas que provocaron sucesivos éxodos masivos de miembros de esta etnia, quienes encontraron refugio en Burundi, Tanzania, Zaire y principalmente en Uganda. El Gobierno y la administración del país estuvieron en manos de la etnia Hutu, principalmente de los clanes que habitan en las regiones de Gisenyi, Ruhengeri y Byumba. Es en este contexto en el que tiene lugar la ofensiva lanzada el 1º de octubre de 1990 por el Frente Patriótico Rwandés (FPR) desde Uganda, que desencadena una intensa guerra civil.

46. La respuesta del Presidente Habyarimana a la ofensiva rebelde incluyó el inicio de un proceso de apertura política y de negociaciones de paz. En junio de 1991 se reformó la Constitución estableciéndose el multipartidismo. En junio de 1992 se iniciaron las negociaciones de paz en Arusha, que culminaron en la celebración del Acuerdo de Paz de 4 de agosto de 1993. El acuerdo establecía la conformación de un gobierno de transición de base amplia que debía incluir a miembros de la minoría Tutsi, la elección de una asamblea nacional de transición, el desplazamiento de una fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y el retiro de las fuerzas militares francesas del Destacamento de Protección de Ciudadanos Franceses y del Destacamento de Asistencia Militar y de Instrucción presentes en el país desde 1990 y 1991, respectivamente. El 5 de octubre de 1993 el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 872 por la que se estableció la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Rwanda (UNAMIR). Sin embargo, ni el gobierno de transición de base amplia ni la Asamblea Nacional de Transición habían sido constituidas cuando se produjo el atentado del 6 de abril de 1994 en Kigali contra el avión presidencial rwandés. El avión, en el que se encontraba el Presidente Juvenal Habyarimana y su homólogo burundiano, Cyprien Ntuyamira, fue atacado por misiles tierra-aire cuando sobrevolaba Kigali.

47. Según informaciones de la prensa internacional, comentarios y denuncias que circulan entre la población de Rwanda y entre personas que están prestando ayuda humanitaria, la acción contra el avión presidencial fue cuidadosamente preparada y técnicamente bien ejecutada, habiéndose llevado a cabo como el inicio de violentas acciones de exterminio contra los Tutsis y Hutus moderados. Se señala además que el ataque fue llevado a cabo por dos mercenarios blancos, es decir, extranjeros cuya nacionalidad no está perfectamente identificada, que habrían sido especialmente contratados para llevar a cabo la operación. Otras informaciones señalan que el misil que derribó al avión presidencial fue disparado por mercenarios extranjeros desde las cercanías del campamento militar de Kanombe, sede de la Guardia Presidencial.

48. Como se sabe, el asesinato del Presidente fue seguido de asesinatos según listas preestablecidas; entre ellos la Primera Ministra, Agathe Uwilingiyimana, el Presidente de la Corte Suprema, Joseph Kavaruganda, algunos miembros del gobierno y dirigentes populares. En realidad, el asesinato del Presidente fue la chispa que dio lugar a la violencia, llegando ésta a una expansión inusitada de asesinatos de población Tutsi y Hutus opositores. La responsabilidad de miembros del Ejército Rwandés, de la Guardia Presidencial, de la Gendarmería, de las milicias del partido extremista Hutu Coalición por la Defensa de la

República (CDR) y del antiguo partido único Movimiento Republicano Nacional por la Democracia y el Desarrollo (MRND) en estas matanzas, ha sido señalada.

49. Las fuerzas del Frente Patriótico Rwandés (FPR) volvieron a las armas y reactivaron una guerra civil que en menos de tres meses llevó a que los rebeldes tomaran Kigali y se constituyera un gobierno provisional. Pero la violencia produjo entretanto no menos de 500.000 víctimas, a las que deben sumarse los cientos de miles de hutus que huyeron cuando Kigali fue tomada, temiendo las represalias del Frente Patriótico Rwandés (FPR) y de la población Tutsi. Esa población, ubicada principalmente en Goma (Zaire), ha sido diezmada por el hambre y enfermedades como el cólera y la disentería.

50. Como se sabe, para hacer frente a estos trágicos eventos, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Rwanda (UNAMIR) ha sido reforzada y se ha movilizado la solidaridad internacional, como lo demostró la operación "Turquesa" llevada a cabo por el Gobierno de Francia con autorización de las Naciones Unidas. Sobre el lugar de los hechos se ha producido la visita del Embajador José Ayala Lasso, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, luego de la cual se reunió de manera extraordinaria la Comisión de Derechos Humanos y se nombró un Relator Especial para Rwanda, Sr. R. Degni-Ségui, quien ya ha efectuado dos viajes en misión y presentado un primer informe que contiene datos sustantivos de gran importancia para conocer en toda su magnitud la tragedia de Rwanda (E/CN.4/1995/7).

51. En lo que compete a esta Relatoría, el objetivo es contribuir a que se esclarezca la participación de mercenarios en el crimen que segó la vida del Presidente de Rwanda y en los cuerpos militares, paramilitares y de milicianos autores de las matanzas. Esto debe acreditarse plenamente, y se deben determinar las conexiones, órdenes y financiación de quienes actuaron. Los datos obtenidos por el Relator Especial de Rwanda pueden ser útiles para iniciar la reconstrucción del hecho. También lo puede ser la información de que dispongan los gobiernos que están prestando su cooperación en la zona, así como los miembros de las organizaciones no gubernamentales que también prestan su ayuda humanitaria a la población. El Relator Especial ha enviado cartas solicitando información que ayude a conocer la verdad y a evitar que el crimen quede impune.

D. Sudáfrica

52. El tema de la violencia racial del apartheid, del entrenamiento de paramilitares y de las agresiones a cargo de mercenarios cometidas desde Sudáfrica contra países y personalidades del África meridional, ha sido permanentemente desarrollado en los informes del Relator Especial. Hoy, luego del proceso electoral de fines de abril de 1994 en el que participaron 27 millones de sudafricanos y de la elección del Sr. Nelson Mandela como primer Presidente elegido democráticamente, puede sostenerse que el proceso de desmontaje del apartheid, integración multirracial e incorporación de Sudáfrica al conjunto de naciones democráticas del mundo, se ha completado exitosamente. El sostenido respaldo político y económico de la comunidad internacional al gobierno democrático de ese país contribuirá a que no haya riesgo de involución, a que se neutralicen los grupos de la minoría blanca que se han organizado militarmente para defender sus privilegios y conseguir el reconocimiento de un

/...

territorio estatal para la población blanca, y a que se consolide la democracia sudafricana.

53. En esta perspectiva, el Relator Especial estima necesario recordar que grupos de minorías violentistas, como el Frente del Pueblo Afrikaner y el Movimiento de Resistencia Afrikaner (AWB), entre otros, se han equipado militarmente, contando con el concurso de mercenarios largamente vinculados a los atentados criminales auspiciados por el antiguo régimen del apartheid. El riesgo de la resistencia violenta y de acciones criminales está pues latente. Por consiguiente, el Relator Especial estima que sería conveniente que el Gobierno del Presidente Mandela prohibiera con severidad la presencia de mercenarios en Sudáfrica, adoptara medidas que sancionaran el reclutamiento, financiamiento, entrenamiento y actividades de mercenarios y que, finalmente, se investigaran los crímenes cometidos por éstos, dentro y fuera de Sudáfrica, de manera tal que las actividades mercenarias no quedaran en la impunidad.

V. PRESENCIA DE MERCENARIOS EN EL TERRITORIO DE LA EX YUGOSLAVIA

54. El Relator Especial ha venido examinando la presencia de mercenarios en los conflictos que tienen lugar en el territorio de la ex Yugoslavia a partir de su 10º informe, presentado a la Asamblea General durante su cuadragésimo séptimo período de sesiones (A/47/412, anexo). Ha enviado diversas comunicaciones a los Estados interesados y sostenido entrevistas con sus representantes, como un procedimiento previo al inicio de un análisis comprensivo anterior a la formulación de conclusiones definitivas, que no se basen en simples rumores, alegaciones sin base o afirmaciones de propaganda de guerra.

55. Constan en el 13º informe del Relator Especial, presentado a la Comisión de Derechos Humanos durante su 50º período de sesiones (E/CN.4/1994/23), las respuestas proporcionadas por los Gobiernos de la República de Croacia y de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), no habiendo respondido hasta la fecha el Gobierno de la República de Bosnia y Herzegovina. Aparecen asimismo en dicho informe los resúmenes de las entrevistas que el Relator Especial sostuvo en la Sede de las Naciones Unidas con los Representantes Permanentes de las Repúblicas de Bosnia y Herzegovina y de Croacia ante las Naciones Unidas, así como con el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) ante las Naciones Unidas. A ellas se suman las entrevistas sostenidas en el marco del 50º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos (febrero de 1994) y el intercambio de comunicaciones sobre la posibilidad de un viaje de misión del Relator Especial a los países de la zona.

56. Los párrafos 63 a 71 del informe que el Relator Especial presentara a la Comisión de Derechos Humanos en su 50º período de sesiones y los párrafos 23 a 34 del informe que presentó ante la Asamblea General en octubre de 1993, dan una información detallada del trabajo realizado para esclarecer las numerosas denuncias sobre presencia de mercenarios en todos los frentes del conflicto que estalló en el territorio de la ex Yugoslavia. Es importante señalar que tales denuncias no han cesado, puesto que de hecho, el sitio a Gorazde, centro musulmán en Bosnia oriental, declarada zona de seguridad por parte de las fuerzas militares de los serbios de Bosnia, y el enfrentamiento en Bihac entre

secesionistas musulmanes liderados por Fikret Abdic, y el ejército de Bosnia y Herzegovina, que recién terminó con la rendición de los rebeldes en agosto de este año, habrían servido de motivo para que mercenarios extranjeros de diversas procedencias volvieran a involucrarse en el conflicto que en su fase actual enfrenta a los serbios de Bosnia que han autoproclamado su propia República Serbia de Bosnia y controlan, luego de sus conquistas militares, el 70% del territorio bosnio, con la República de Bosnia y Herzegovina.

57. La situación que predomina en el momento de elaborarse el presente informe (agosto de 1994) es la de una resistencia de los serbios de Bosnia a aceptar la propuesta del denominado "Grupo de Contacto" integrado por los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia y la Unión Europea, que ha formalizado como solución de paz realista, la asignación de un 51% del territorio bosnio a la Federación Croata-Musulmana y del 49% a los serbios de Bosnia, además de otras disposiciones que significarían la posibilidad de un arreglo de paz global, en cuyo contexto y por la vía de negociaciones políticas se podrían ir solucionando los impases y las reclamaciones pendientes. Como es obvio, para el retiro de los mercenarios que han actuado en los conflictos y cuya presencia ha sido denunciada, admitida, relativizada y explicada por algunas de las partes, los acuerdos de paz y su efectiva aplicación son una condición indispensable.

58. En la perspectiva de precisar las denuncias sobre la presencia de mercenarios en los conflictos habidos en el territorio de la ex Yugoslavia, el Relator Especial ha recibido invitaciones formales para visitar Croacia y la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro). Estos viajes de misión se efectuarían en la segunda quincena del mes de septiembre y el informe correspondiente se presentará a la Comisión de Derechos Humanos durante su próximo período de sesiones. Sin perjuicio de ello, y dada la importancia del asunto, se adelantará en la presentación oral ante la Tercera Comisión, un comentario sobre la visita, que habrá finalizado en las vísperas de la presentación oral de este informe ante la Tercera Comisión.

59. En cuanto a antecedentes inmediatos de esta visita, se transcriben a continuación las últimas comunicaciones sustantivas recibidas de los Gobiernos de Croacia y de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), que se refieren en un caso a descargos sobre alegaciones transmitidas con anterioridad sobre la presencia de mercenarios en Croacia, y a nuevas denuncias y precisiones adicionales a alegaciones anteriores que insisten en la condición de mercenarios de personas que actuaron en el conflicto entre Croacia y la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro).

60. Mediante nota verbal No. 661/1, de fecha 5 de julio de 1993, la Misión Permanente de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra presentó una relación de presuntos mercenarios que habrían participado en los conflictos en Croacia de 1991 al lado de las fuerzas armadas croatas. En referencia al conflicto en Bosnia y Herzegovina, señaló también, entre otras cosas, la participación de mercenarios extranjeros al lado de las fuerzas irregulares croatas, del lado de las fuerzas gubernamentales de Bosnia y Herzegovina y de las fuerzas irregulares musulmanas durante 1992. Con relación al mismo conflicto durante enero de 1993, la comunicación denuncia la presencia de cerca de 100 mercenarios provenientes de Dinamarca, los Estados Unidos de América, Finlandia y Suecia, para apoyar a la 17ª brigada musulmana estacionada en Travnik; señala que en febrero de 1993,

/...

20 ciudadanos británicos llegaron a Zagreb como mercenarios esperando unirse a las fuerzas musulmanas. Finalmente, manifiesta que un grupo de aproximadamente 43 "muyahidin" provenientes de Arabia Saudita, liderados por un tal Abu Isa El Meki, cometió brutales crímenes y barbaridades contra poblaciones serbias en el territorio de Bosnia y Herzegovina, en la municipalidad de Teslic. Responsabiliza también a este grupo de haber participado en la matanza de soldados serbios que eran prisioneros, entre los cuales menciona a los Sres. Bladoje Blagojevic, Nenad Petrovic y Branko Djurica, y del abuso sexual de mujeres y niños serbios.

61. El Relator Especial puso las denuncias presentadas por el Gobierno de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) en conocimiento de los Gobiernos de las Repúblicas de Bosnia y Herzegovina y de Croacia, solicitándoles una respuesta amplia, detallada y documentada respecto a las alegaciones recibidas.

62. El 1º de febrero de 1994, el Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Croacia, Sr. Mate Granic, dirigió la siguiente comunicación al Relator Especial dando respuesta a su solicitud de información:

"La declaración inicial que figura en el anexo que lleva como título 'Extranjeros en las fuerzas militares y paramilitares en Croacia y en Bosnia y Herzegovina' que dice 'Desde el principio del conflicto armado en Yugoslavia, Croacia ha reclutado un número considerable de mercenarios, instructores y diversos expertos extranjeros para sus fuerzas armadas', no ha sido corroborada en ningún otro lugar del texto; tampoco se han comprobado ninguna de las acusaciones (43 en total).

Las primeras dos acusaciones: El 28 de septiembre de 1991 un grupo de 51 filipinos, incluidos dos jamaquinos, llegaron al aeropuerto de Sarajevo.

El 7 de octubre de 1991, una aeronave procedente de Roma aterrizó en el aeropuerto de Tivat. Los ciudadanos filipinos que deseaban incorporarse al ejército de Croacia se encontraban a bordo de dicho avión. La aeronave fue enviada de regreso a Roma.

En cuanto a las dos primeras acusaciones, simplemente se refieren a la supuestas intenciones de algunos ciudadanos filipinos. La República de Croacia no tiene datos al respecto.

Tercera acusación: A principios de octubre de 1991 más de 100 ciudadanos argentinos de origen croata pero nacidos en la Argentina llegaron a Croacia para incorporarse a las fuerzas armadas croatas.

En cuanto a la tercera acusación sobre 100 ciudadanos argentinos de origen croata y nacidos en la Argentina que procuraban incorporarse a las fuerzas armadas croatas, la República de Croacia no tiene información al respecto.

Cuarta acusación: A fines de octubre de 1991, un grupo de ucranianos estableció contacto con la Embajada de Yugoslavia en Moscú para solicitar una visa yugoslava a fin de viajar a Croacia y sumarse a sus tropas

irregulares. La oficina de la empresa Astra de Moscú es la sede para el reclutamiento y la organización del transporte de mercenarios a Croacia.

La cuarta acusación sobre un grupo de ucranianos no es más que una declaración infundada formulada por la Misión de Moscú que representa a la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro). Aunque eso fuera cierto, sólo significaría que los ciudadanos ucranianos deseaban sumarse a las tropas irregulares serbias dentro de la República de Croacia. Esas intenciones se demuestran claramente en el hecho de que se dirigieron a la Embajada de la República Federativa de Yugoslavia. La República de Croacia no tiene información alguna al respecto. La acusación de que la oficina de Moscú de la empresa Astra Inc. ha sido la sede de la contratación y la organización del transporte de mercenarios a Croacia asimismo es infundada.

Quinta acusación: A fines de octubre de 1991, la Embajada yugoslava en Londres recibió una carta de un tal Stephen Schapke en la que ofrecía los servicios de 250 ex paracaidistas de los Estados Unidos que estaban dispuestos a luchar para cualquier bando en Yugoslavia.

La quinta acusación muestra los deseos y las intenciones de alguien que de ninguna manera podría estar vinculado a la República de Croacia. La República de Croacia no tienen conocimiento de esa información.

Sexta acusación: A principios de noviembre de 1991, 20 mercenarios fueron reclutados en los Países Bajos y enviados a Croacia para incorporarse a sus fuerzas irregulares.

La sexta acusación sobre aproximadamente 20 mercenarios reclutados en los Países Bajos sólo significa que se incorporaron a las fuerzas irregulares serbias en la República de Croacia.

Séptima acusación: Durante varios meses en 1991, el Coronel Gyla Attila del ejército húngaro estaba asignado a la sede de la Guardia Nacional Croata para Eslavonia, Baranja y Srem Occidental. Estaba encargado de planificar y realizar las actividades de combate de unidades de la Guardia Nacional Croata en esa región.

En cuanto a la séptima acusación, en la segunda mitad de 1991, el Sr. Gyla Attila, ciudadano húngaro, se ofreció voluntariamente para incorporarse al ejército croata en la región de Eslavonia. Sin embargo, no se sabe que haya tenido el rango de coronel. En todo caso, no actuó de comandante en jefe de unidades de la Guardia Nacional Croata.

Octava acusación: A fines de 1991, la zona de operaciones Osijek del Ejército Croata tenía una brigada internacional establecida por Eduardo Roses Flores, corresponsal basado en Zagreb del periódico catalán 'la Vanguardia'. Dicha brigada estaba integrada por ex combatientes de la Legión Extranjera de Francia y mercenarios de las guerras en el Oriente Medio y América Latina. A menudo funcionaba en forma independiente en la región de Eslavonia oriental y causó la muerte de civiles serbios en las aldeas de Divos, Ernestinovo, Tenjski Antunovac y otras.

Con respecto a la octava acusación sobre una brigada internacional, de hecho se refiere a voluntarios. No hay datos que demuestren que fueran autores de asesinatos. Su comandante en jefe, el Sr. Eduardo Jorge Roses Flores, nacido en 1960, es un ciudadano croata.

Novena acusación: El ciudadano alemán Kurt (Hans Wilhelm) Reisner, un miembro activo de la Brigada Internacional Osijek y Colton Perry, un ciudadano de los Estados Unidos, Teniente y Comandante del Escuadrón de Reconocimiento 131 del Ejército Croata estacionado en Zupanja, fueron identificados en el campamento de detenidos de Sremska Mitrovica.

En cuanto a la novena acusación, el Sr. Kurt Reisner, ciudadano alemán, y el Sr. Colton Perry, ciudadano de los Estados Unidos, se ofrecieron voluntariamente para prestar servicios durante algún tiempo en la brigada internacional.

Acusación No. 10: Un cierto número de nacionales extranjeros lucharon en la Guardia Nacional Croata en la batalla de Vukovar. Eran un ciudadano alemán, Harlan von Besinger, y un ciudadano francés, Jean Nicolier.

En cuanto a la acusación No. 10, el Sr. Jean Nicolier, otro voluntario, adquirió la ciudadanía croata.

Acusación No. 11: Un nacional suizo y el ciudadano holandés Gerrit Bronk resultaron muertos cerca de Okucani en noviembre de 1991 y los ciudadanos británicos Edward White y Christopher Hencock, ambos pertenecientes a la Brigada Internacional, resultaron heridos cerca de Tenjski Antunovac.

Con respecto a la acusación No. 11, no se dispone de datos sobre las supuestas muertes del Sr. Christopher Hencock, el Sr. Edward White y el Sr. Gerrit Bronk. Sin embargo, hay información de que el Sr. Bronk se fue de la República de Croacia tras la promulgación del decreto sobre separación de nacionales extranjeros del ejército croata el 4 de septiembre de 1992.

Acusación No. 12: La denominada Primera Brigada de Combate Croata estacionada en Split y cuya responsabilidad era realizar operaciones marítimas subversivas cuenta entre sus filas a 20 ciudadanos italianos.

La República de Croacia no tiene conocimiento de información alguna relativa a la acusación No. 12.

En cuanto a las acusaciones restantes, no se aplican a la participación de posibles mercenarios en las fuerzas armadas de la República de Croacia. La República de Croacia no tiene constancia de que haya grupos que supuestamente llegan a su territorio o ingresan a él con miras a dirigirse a la República de Bosnia y Herzegovina.

En consecuencia, en nombre del Gobierno de la República de Croacia reitero que todas las acusaciones sobre la participación de mercenarios extranjeros en el ejército croata, procedentes del Gobierno de la denominada República Federativa de Yugoslavia son arbitrarias, infundadas y

mal entendidas, y por consiguiente enérgicamente rechazadas. Sin embargo, quisiera señalar que ha habido algunos casos insignificantes de personas que a título personal (algunos de ellos de origen croata) ofrecieron sus servicios voluntariamente a Croacia cuando ésta fue motivo de agresión y al principio de la guerra (en 1991). Las autoridades croatas han informado debidamente sobre su presencia al público nacional e internacional desde fines de 1991. El 4 de septiembre de 1992, se promulgó la orden de separar a nacionales extranjeros del ejército croata, de conformidad con la política croata general de utilizar sus propios recursos y personal en la defensa contra la agresión. Aprovecho la oportunidad para informarle que la República de Croacia ha iniciado el procedimiento para adherirse a la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, de 4 de diciembre de 1989."

63. En respuesta a una nueva solicitud de información del Relator Especial, transmitida el 29 de abril de 1994, el Sr. Pavle Bulatovic, Ministro Federal de Defensa de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), transmitió la siguiente comunicación al Relator Especial, de fecha 12 de julio de 1994:

"Con respecto a su carta dirigida al Ministro Federal de Relaciones Exteriores, Sr. Vladislav Jovanovic, quisiéramos informarle sobre los datos más recientes que tenemos, junto con los que les transmitimos anteriormente, sobre la utilización de mercenarios en combates en los territorios de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia. De conformidad con la información recibida de un órgano competente del Ministerio Federal de Defensa - la Comisión para el Intercambio de Prisioneros y la Búsqueda de Personas Desaparecidas - entre los integrantes del ejército croata que se encuentran detenidos y participan como mercenarios en conflictos armados en el territorio de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia se encontraban los siguientes ciudadanos extranjeros:

- Colton Glenn Perry. Nacido el 30 de diciembre de 1967 en Portsmouth, Virginia, Estados Unidos de América. Por decisión del entonces Presidente del Gobierno de la República Federativa de Yugoslavia, Sr. Milan Panic, por conducto del representante de la Comisión para el Intercambio de Prisioneros fue entregado al Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Belgrado el 8 de agosto de 1992;
- Pesa Nastazio Marin. Nacido el 3 de febrero de 1971 en Nueva Jersey, Estados Unidos de América. Fue entregado al Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Belgrado el mismo día que Colton.
- Reisinger Hans Kurt. Nacido el 26 de mayo de 1963 en Seesen, República Federal de Alemania. Vivió en Hamburgo. Por conducto de un representante de la Comisión ha sido entregado al Encargado de Negocios de la Embajada de la República Federal de Alemania en Belgrado el 25 de septiembre de 1992;
- Johannes Tilder. Nacido el 25 de octubre de 1963 en Enkhuizen, Países Bajos. Graduado de la Academia Militar Real, completó entrenamiento de reconocimiento y paracaidismo en la Legión Extranjera de Francia.

/...

Durante un cierto tiempo prestó servicios en una base de la OTAN en la República Federal de Alemania. Ha estado casado con una mujer de Croacia, lo que le permitió obtener la ciudadanía croata. Vivió en Zagreb desde el 21 de noviembre de 1991. Fue capturado el 5 de abril de 1994 en Teslingrad, República Serbia de Krajina, mientras realizaba una operación de reconocimiento e inteligencia, como segundo comandante de la unidad de reconocimiento de la Novena Brigada de Guardia, integrada principalmente por mercenarios. Es conocido por sus crímenes cometidos contra serbios en Lika;

- Tilder resultó muerto mientras escapaba de un vehículo de la Policía Militar el 10 de mayo de 1994, que se dirigía a la cárcel del condado en Knin. Fue enterrado el 13 de mayo de 1994 en el cementerio de la prisión en Knin;

Durante la interrogación, Tilder admitió que había ordenado y cometido personalmente, junto con miembros de su unidad, numerosos crímenes contra civiles inocentes y miembros heridos del Ejército Serbio de Krajina (asesinatos, matanzas, violaciones, etc.). La información completa de este caso está en posesión de los órganos competentes de la República Serbia de Krajina;

Quisiera aprovechar esta oportunidad para informarle que las autoridades competentes de la República Federativa de Yugoslavia están realizando investigaciones de actividades realizadas en ciertos países, especialmente en Turquía, Albania, y la República Federal de Alemania, donde existen campamentos especiales para el entrenamiento de albanos de Kosovo y Metohija, y musulmanes de la región de Raska a fin de prepararlos para que realicen operaciones de comando y de terrorismo y rebeliones armadas en la República Federativa de Yugoslavia. Se le informará debidamente sobre los detalles de dichas investigaciones."

VI. PRESENCIA DE MERCENARIOS EN CONFLICTOS QUE HAN SURGIDO EN ESTADOS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA EX UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS (URSS)

A. Armenia - Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)

64. Tres años después de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) es un hecho de comprobación objetiva que cuestiones de diferencia étnica, identidad nacional diversificada y configuración de la frontera de cada Estado han creado dificultades y conflictos internos en el proceso de consolidación de cada uno de los Estados declarados independientes. En realidad, las tensiones se han dado en todas partes, pero algunas de ellas adquieren características graves al estallar situaciones de guerra, sea para proclamar en una parte del territorio el establecimiento de una república independiente o por la voluntad de anexarse a un Estado vecino, o bien la mayor parte de las veces por razones de pertenecer un porcentaje significativo de la población a la misma etnia del Estado colindante. El Relator Especial se ha ocupado de varios de estos conflictos al recibir denuncias de la participación de mercenarios en ellos.

65. Uno de los casos más visibles ha sido el del enfrentamiento militar entre los Estados independientes de Armenia y de Azerbaiyán por la disputa de Nagorno-Karabaj, cuya ubicación territorial corresponde a Azerbaiyán pero donde habita una mayoría armenia que no aceptó formar parte del Estado independiente de Azerbaiyán, proclamándose casi inmediatamente, el 2 de septiembre de 1991, República de Nagorno-Karabaj, reclamando la aplicación de la ley soviética que disponía que una provincia autónoma podía decidir seguir formando parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), si la república a la cual estaba integrada declaraba su independencia de la Unión. Azerbaiyán no aceptó el argumento y adoptó decisiones militares para mantener su soberanía sobre el enclave, mientras aplicaba también acciones de bloqueo económico contra Armenia que apoyaba las pretensiones de Nagorno-Karabaj. Surgió así un conflicto armado que dura hasta la fecha, en el que hay por un lado la resistencia de la mayoría armeniana en el enclave de Nagorno-Karabaj, pero en sustancia, una guerra entre Azerbaiyán y Armenia.

66. A lo largo del conflicto armado, que ha ocasionado más de 20.000 muertos desde 1988, las fuerzas azeríes han lanzado ofensivas contra los rebeldes karabajíes y afectado lugares como Mardakert, Haterk, Askeran y la región de Agdam, mientras que los desplazamientos de las fuerzas conjuntas armenio-karabajíes lograban penetrar y controlar una vigésima parte del territorio de Azerbaiyán.

67. A lo largo del presente año el conflicto ha continuado, habiendo colapsado el 18 de mayo de 1994 las conversaciones de paz. En ese mes, fuerzas de Azerbaiyán reanudaron el bombardeo de Mardakert, en el nor-este de Nagorno-Karabaj. También acusó a Armenia de lanzar un gran asalto contra Nakhichevan, una región montañosa próxima al territorio armenio. Otra denuncia azerí se refiere al ataque de la aldea Cyunnyut por parte de la artillería armenia. El conflicto no ha progresado hacia perspectivas de un acuerdo de paz, sino hacia una guerra de posiciones que amenaza con durar varios años. Uno de los elementos preocupantes de esta guerra es el reclutamiento, la financiación y la utilización de mercenarios, según denuncias recibidas por el Relator Especial.

68. En el párrafo 76 de su informe a la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1994/23), el Relator Especial señaló que las denuncias recibidas las había puesto en conocimiento del Gobierno de Azerbaiyán, mediante carta de fecha 26 de julio de 1993, y del Gobierno de Armenia, con carta de fecha 28 de julio de 1993. En el texto se hace referencia a las siguientes denuncias:

a) El 26 de febrero de 1992, se dio muerte a un mercenario francés durante un ataque azerí contra la aldea de Karin-Tak, cerca de Stepanakert;

b) En febrero de 1992, se dio muerte a un mercenario extranjero que peleaba en las fuerzas armenias de autodefensa en el ataque contra la ciudad azerí de Khojaly;

c) Del 12 al 14 de junio de 1992, se dio muerte a nueve mercenarios extranjeros que luchaban en las fuerzas armenias en las batallas realizadas en torno a Askeran;

d) El 1º de julio de 1992, el comandante de un batallón de fuerzas de autodefensa de Azerbaiyán declaró a la agencia noticiosa Turan que, en una

/...

batalla realizada en la región de Mardakert, se había dado muerte a un mercenario extranjero que formaba parte del Ejército Nacional Armenio;

e) El 1º de junio de 1993, seis antiguos soldados rusos fueron capturados en acción después de que, según se informó, habían llevado a cabo operaciones subversivas en Nagorno-Karabaj. Conforme a la información recibida, fueron reclutados por oficiales rusos para entrenar a las unidades armenias en Nagorno-Karabaj, una vez disueltas sus unidades rusas en Armenia. Se informa que esos soldados fueron condenados como mercenarios;

f) Se informa que los mercenarios extranjeros que trabajan por una remuneración en las fuerzas de Nagorno-Karabaj y en las fuerzas armenias, aunque también en las fuerzas azeríes, han bombardeado casas, hospitales e iglesias, saqueado y quemado viviendas, que intencionalmente han sembrado el terror entre las poblaciones civiles, expulsándolas de las aldeas, han dado muerte y herido a civiles, entre ellos mujeres y niños, y han tomado rehenes civiles;

g) Se informa de algunos mercenarios extranjeros de origen eslavo y turco que desempeñan funciones militares altamente especializadas en el ejército azerí.

69. Hasta la fecha de la elaboración del presente informe (primera quincena del mes de agosto de 1994), no se ha recibido la respuesta del Gobierno de Armenia. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán ha enviado una detallada comunicación en la que describe la presencia de mercenarios rusos en las fuerzas armenias, en base a datos provenientes del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Seguridad Nacional, del de Interior y de la Corte Suprema de Azerbaiyán. Según la comunicación, la presencia de mercenarios es un hecho cierto e indubitable.

70. Según el relato de testigos directos, datos aparecidos en publicaciones rusas sobre nombres de personas y pagos otorgados a soldados y oficiales rusos para su reclutamiento como mercenarios así como personas capturadas por haber violado la soberanía de Azerbaiyán, en la investigación judicial dichas personas admitieron su culpa y testificaron que los armenios hacían un empleo amplio de mercenarios. Estas personas (11 por lo menos) fueron sentenciadas a 15 años de prisión; posteriormente, atendiendo los llamados del Presidente de la Federación de Rusia, fueron entregados a los órganos del Estado de la Federación de Rusia.

71. La comunicación se refiere a la presencia de mercenarios de diversas nacionalidades extranjeras empleados por Armenia para agredir a Azerbaiyán y señala la necesidad de coordinar medidas por la comunidad internacional para imponer severas sanciones a los Estados que apelan al empleo de mercenarios. Dado el tenor de la comunicación, el Relator Especial estima necesario transcribirla íntegramente.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Azerbaiyán ha considerado las cuestiones planteadas en su carta y ha preparado información sobre el tema, que tenemos el honor de presentarle para su examen.

No cabe duda de que los problemas relacionados con la utilización de mercenarios revisten un carácter urgente y de importancia excepcional para

/...

Azerbaiyán. Durante más de seis años el Estado vecino de la República de Armenia ha aplicado una política agresiva de ocupación contra la República de Azerbaiyán y ha hecho uso frecuente de mercenarios reclutados, financiados y entrenados directamente por el Gobierno de Armenia con la ayuda de la diáspora armenia en el extranjero.

Las fuerzas armadas de la República de Armenia han ocupado alrededor del 20% del territorio de Azerbaiyán, más de 1 millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares a consecuencia de la deportación por la fuerza de ciudadanos azerbaiyanos de Armenia y de la ocupación de parte de tierras azerbaiyanas, miles de ciudadanos pacíficos han perecido y siguen pereciendo, principalmente los grupos más vulnerables de la población - las personas de edad, las mujeres y los niños - y hay más de 3.000 rehenes en manos de los soldados armenios.

Al cometer sus crímenes contra mi país, las fuerzas armadas de la República de Armenia están utilizando activamente bandas de mercenarios para menoscabar la soberanía, la integridad territorial e independencia política de la República de Azerbaiyán, lo que amenaza e impide el pleno ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo de Azerbaiyán.

La información presentada por el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Asuntos Internos y la Suprema Corte de la República de Azerbaiyán, que consideramos necesario señalar a su atención, no deja duda alguna sobre el hecho de que la República de Armenia está utilizando mercenarios en la guerra contra Azerbaiyán para apoderarse de parte de sus tierras ancestrales por la fuerza.

Por ejemplo, la tragedia de la población azerbaiyana de Khojaly será para siempre un recuerdo lamentable en la historia de mi país. Dicha población fue tomada por tropas armenias los días 25 y 26 de febrero de 1992 con el apoyo y la participación directa de unidades de mercenarios del regimiento 366º de infantería motorizada del ejército de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estacionado en ese momento en Hankendi. Los habitantes de la población fueron avasallados por vehículos de combate de infantería y vehículos blindados de transporte de tropas. Dispararon a quemarropa contra algunas personas de edad, mujeres y niños, quitaron el cuero cabelludo a prisioneros, les arrancaron las uñas, los ojos, las orejas. El único error de esas personas era ser azerbaiyanos. Según el testimonio de Y. Numanov, S. Tangirov y S. Ezizov, y soldados que huyeron de los cuarteles del regimiento antes del ataque contra Khojaly, por cada disparo contra la población azerbaiyana de Shusha los soldados del regimiento recibían 20 litros de alcohol de los armenios y por cada misión nocturna de un vehículo de combate de infantería contra un objetivo "militar", el comandante recibía 1.000 rublos.

Según los relatos de algunos de estos mismos soldados, que se encontraban en Khojaly después de haber huido del regimiento, vieron con sus propios ojos la aniquilación de ciudadanos pacíficos por miembros del regimiento y combatientes armenios. Familias enteras resultaron muertas, los padres frente a sus hijos, todos ellos tras recibir disparos a quemarropa. Durante la noche y durante la mañana siguiente, remataron a los heridos y dispararon contra los prisioneros. Sometieron a las personas

a las burlas más insultantes, los persiguieron, les robaron y saquearon sus pertenencias. Según el testimonio de Jamil Mamedov, un habitante de Khojaly prisionero de los armenios, entraron a la ciudad tanques y vehículos blindados de transporte de tropas, destruyeron las casas y avasallaron a la población. Detrás de los mercenarios pertenecientes a la brigada motorizada 366ª del ejército de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas venían los combatientes armenios. Mientras era prisionero, fue golpeado por mercenarios extranjeros, entre los cuales J. Mamedov dice que vio a algunos de piel oscura.

A consecuencia de los ejemplos cada vez más frecuentes de la reciente utilización de mercenarios por las partes participantes en conflictos armados en el territorio de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se presta más atención a ese fenómeno en la prensa. Así pues, un artículo titulado "Mercenarios de Rusia" en la revista Russky porjadok informa sobre el reclutamiento y la utilización de mercenarios por los armenios:

'Los casos de la utilización de soldados y oficiales rusos para solucionar cuestiones nacionales en regiones delicadas de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya no son un secreto. Se filtran a los medios de difusión informes sobre el reclutamiento de mercenarios de Rusia para luchar en la región de Georgia-Abjasia, Armenia-Azerbaiyán y otros conflictos regionales ... Igor Chernenko, de 25 años de edad, cuenta que los encargados del reclutamiento armenio en Novosibirsk le ofrecieron 5.000 dólares de los EE.UU. por mes para participar en la guerra de Karabaj. Tras recibir un adelanto de 100 dólares, Igor fue transportado en un avión privado desde el territorio de Krasnodar a Armenia, desde donde fue enviado con otros jóvenes de otras partes de Rusia a la zona bélica. Según Chernenko, él y los demás soldados rusos fueron utilizados por los comandantes de operaciones como "carne de cañón"; además los enviaron a las operaciones más peligrosas. Después de un mes, Igor y otros dos mercenarios rusos pidieron que se les pagara lo que habían ganado y que se les enviara de regreso a Rusia, de conformidad con las condiciones de su contrato. Durante la noche, los armenios, los desarmaron, los llevaron al distrito de Agdam de Azerbaiyán, donde obligaron a Igor y a sus dos compatriotas a que se pusieran uniformes del ejército azerbaiyano, los fotografiaron varias veces y luego los balearon. A pesar de haber recibido dos balas en el tórax, Igor sobrevivió milagrosamente y fue recogido por miembros del OMON de Azerbaiyán y enviado a un hospital militar.'

El incidente más notorio fue el caso de los seis ciudadanos de la Federación de Rusia que prestaban servicios en el Séptimo Regimiento de las fuerzas armadas rusas, estacionados en el territorio de la República de Armenia quienes, mientras participaban en operaciones militares contra la República de Azerbaiyán, fueron capturados y sometidos a juicio por sus crímenes.

Según la acusación del proceso criminal contra K. V. Tukish, M. S. Lisovoy, A. A. Filippov, V. P. Kudinov e Y. L. Evstigneev, soldados de una compañía perteneciente a la unidad militar No. 39826 del Séptimo Ejército

/...

ruso estacionado en Yerevan, capital de Armenia, en primer lugar violaron la frontera estatal de la República de Azerbaiyán y luego penetraron en la zona montañosa de Karabaj. Tras pasar el período de principios de junio a principios de septiembre de 1992 en un centro para saboteadores en la aldea de Ballydzha en territorio de Azerbaiyán, prepararon y ejecutaron operaciones contra la soberana República de Azerbaiyán junto a las fuerzas armadas armenias.

Habían sido reclutados en Yerevan por miembros de las fuerzas armadas armenias que anteriormente habían prestado servicios con el regimiento motorizado de infantería 366° del ejército de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuyas "actividades" se han mencionado anteriormente. A fin de que participaran en operaciones militares en territorio de Azerbaiyán, se les prometieron grandes sumas de dinero, considerablemente más elevadas que la remuneración que recibían como miembros de las fuerzas armadas rusas.

Para el 15 de junio de 1992, Tukish, Kudinov, Lisovoy, Evstigneev, Filippov, Dorienco y Mrachkov participaban junto con unidades del ejército armenio en la lucha en torno a la aldea de Syrkhavend en el distrito de Agderin de la República de Azerbaiyán. Los mercenarios destruyeron tres tanques T-72 y un vehículo BMP-2 de combate de infantería que pertenecía al ejército nacional de Azerbaiyán, mataron a su personal, así como a varias docenas de soldados azerbaiyanos.

Los atacantes también sufrieron pérdidas. Dos mercenarios, Dyachikhin y Dorienco, resultaron muertos en la lucha.

Cuando esta operación terminó, un teniente coronel mercenario de nombre "Zhenya" en la población de Hankendi le dio a cada uno de ellos 5.000 rublos, mientras que Tukish y Filipov recibieron 3.000 rublos más cada uno. Además, en el Ministerio de Defensa armenio de Yerevan recibieron 25.000 rublos para los funerales de sus dos camaradas que habían muerto y 44.000 para los seis sobrevivientes. Después de eso, se dio a un grupo de 11 mercenarios la labor de realizar actividades de reconocimiento y de hacer estallar un puente en territorio de Azerbaiyán. Durante esa operación los saboteadores perdieron cinco hombres y los cinco restantes fueron apresados por miembros de la policía militar del ejército nacional de Azerbaiyán.

Durante la investigación judicial y el juicio, los acusados, que reconocieron plenamente su culpabilidad, dieron testimonio de que los armenios habían utilizado frecuentemente mercenarios, a quienes se les confiaban las funciones militares más especializadas al realizar sabotajes contra la República soberana de Azerbaiyán.

El 12 de mayo de 1993, el tribunal militar de la Suprema Corte de la República de Azerbaiyán sentenció a muerte a K. V. Tukish, A. A. Filipov, Y. L. Evstigneev y M. S. Lisovoy y a V. N. Semion a 15 años de cárcel.

Sin embargo, las sentencias no se ejecutaron. Ante una apelación del Sr. B. N. Yeltsin, Presidente de la Federación de Rusia, y del Sr. R. I. Khasbulatov, Presidente del Consejo Supremo de la Federación de Rusia

/...

dirigida a los jefes de los órganos estatales más altos de Azerbaiyán y ante sus garantías de que se tomarían todas las medidas necesarias para evitar la ulterior participación de ciudadanos rusos en grupos de mercenarios participantes en operaciones militares contra la República de Azerbaiyán y a fin de promover el ulterior desarrollo de relaciones de buena vecindad y de vínculos en general entre la República de Azerbaiyán y la Federación de Rusia, guiados además por intereses más altos del Estado de Azerbaiyán y principios humanitarios, la Asamblea Nacional (el Parlamento) de la República de Azerbaiyán decidió el 3 de septiembre de 1993 entregar a los seis antiguos miembros del ejército ruso y ciudadanos de la Federación de Rusia a los órganos estatales de la Federación de Rusia.

El hecho de que ciudadanos de la Federación de Rusia participen como mercenarios en operaciones militares contra Azerbaiyán del lado de las fuerzas armadas armenias también ha sido confirmado en numerosas declaraciones formuladas por prisioneros de guerra armenios.

Según uno de ellos, Armen Avetisovich Torosyan, el 30 de agosto de 1993 mientras pasaba por la población de Fizuli en Azerbaiyán, vio tres vehículos "Ural" cada uno de los cuales transportaba 30 soldados rusos.

Según otro prisionero, Arshavir Beibutovich Barayan, que fue interrogado el 26 de mayo de 1993, había 45 oficiales que participaban en el entrenamiento de personal en el Centro General de Entrenamiento Militar, de los cuales 25 eran rusos.

Según el soldado Levon Sergeevich Dadayan, que fue tomado prisionero en 1993, cada unidad de Syrkhavend tenía de 5 a 10 combatientes armenios asignados a ella, entre los cuales había mercenarios rusos.

La participación de mercenarios extranjeros en las operaciones militares contra Azerbaiyán también ha sido confirmada por los prisioneros armenios A. M. Egazaryan, D. G. Nazaryan, A. V. Gasparyan, R. R. Grigoryan y S. T. Gevorkyan.

El 5 de enero de 1994, mientras luchaban en el distrito de Beilagan de Azerbaiyán, Vasily Vladimirovich Lugovoy, ciudadano de la Federación de Rusia que luchaba del lado de las fuerzas armadas armenias, fue tomado prisionero. Según declaraciones a los organismos de investigación y en una entrevista de prensa, dijo que en noviembre de 1993 un grupo de 30 mercenarios fue transportado en autobús de Yereván a Hankendi para participar en operaciones militares contra Azerbaiyán. También dijo que se habían estacionado mercenarios rusos en los territorios ocupados de Azerbaiyán, en Fizuli, Kubadly, Shusha y Hankendi, y que también había francotiradores de Lituania y Estonia.

Durante la lucha en el distrito de Geranboy de Azerbaiyán, se encontró una lista de la que se desprendía que de 78 personas que recibían armas, 11 eran de nacionalidad rusa.

En enero de 1994, durante la lucha en el distrito de Kelbajar de Azerbaiyán, fueron capturados varios oficiales rusos que pertenecían a la unidad militar 11233 del Ministerio de Defensa de Rusia.

Según un informe aparecido en Novaya ezhednevnyaya gazeta de 11 de junio de 1993

'Además, en estilo 'NKR', tres compañías mixtas de mercenarios realizan operaciones. Dichas compañías vinieron a Transcaucasia ilegalmente desde Siria, Jordania, Italia, Francia, Israel y diversos países africanos.

Los mercenarios son reclutados por representantes de la diáspora armenia en el extranjero. La paga diaria que reciben por participar en operaciones militares, según algunas fuentes, es de 250 dólares. Los mercenarios se distinguen por su particular crueldad, no sólo con respecto al enemigo armado sino también en relación con la población pacífica, incluidas las mujeres y los niños.'

En la lucha por la aldea de Farrukh en el distrito de Agdam de Azerbaiyán en octubre de 1992, entre los armenios muertos se descubrieron los cadáveres de dos mujeres. Llevaban tarjetas de identidad en los bolsillos. Según esas tarjetas eran ciudadanas francesas, que habían sido reclutadas por conducto del Centro Georges Pompidou y luchaban como francotiradoras del lado de los armenios.

En una de las batallas libradas en el distrito de Kelbajar de Azerbaiyán, dos mercenarios de piel oscura resultaron muertos. Se supone que procedían de países del Asia sudoriental y que luchaban del lado de las fuerzas armenias.

Estos y otros hechos dan muestras claras e incontrovertibles de que la República de Armenia, en su lucha armada de agresión contra la República de Azerbaiyán, está utilizando todos los medios posibles para promover su política expansionista, aunque esos medios violen directamente los principios y las normas fundamentales del derecho internacional y de la moralidad humana y hayan sido unánimemente condenados por la comunidad mundial.

Los hechos expuestos anteriormente revelan sin lugar a dudas los esfuerzos que realiza el Ministro de Defensa de Armenia y los poderosos grupos de presión armenios en el extranjero a fines de reclutar mercenarios extranjeros para la agresión armada contra la República de Azerbaiyán, menoscabar su integridad territorial e independencia política e impedir el pleno ejercicio del derecho de libre determinación al pueblo de Azerbaiyán.

El modo de evitar la utilización de mercenarios parece ser el fortalecimiento de medidas coordinadas por parte de la comunidad internacional y la imposición de severas sanciones internacionales en los Estados que aplican una política agresiva con el objeto de crear situaciones bélicas sangrientas y utilizar unidades militares de mercenarios para lograr su fin.

La República de Azerbaiyán todavía no es parte en la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios ni en cualquier tratado internacional sobre la prohibición de actividades de mercenarios y su utilización, pero comparte plenamente la única opinión posible de que las actividades de los mercenarios son un fenómeno inaceptable, prohibido por las leyes en vigor en Azerbaiyán, según las cuales el ejército nacional está integrado exclusivamente por las fuerzas armadas de la República de Azerbaiyán.

Esperamos que los hechos que hemos presentado para su examen sobre las cuestiones planteadas en su carta con respecto al urgente e importante problema de la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos e impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación resulte útil y se utilice para preparar el informe de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo noveno período de sesiones y de la Comisión de Derechos Humanos en su 51º período de sesiones."

72. El Relator Especial ha enviado una comunicación al Gobierno de Armenia, transcribiéndole la carta recibida del Ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán y solicitándole los descargos que estime necesarios. La respuesta que se reciba, así como alguna información adicional que se pida al Gobierno de Azerbaiyán, servirán para presentar una visión completa sobre este asunto.

B. Otros Estados

73. El informe presentado por el Relator Especial al 50º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1994/23), contiene amplia información en sus párrafos 78 a 98, que se refiere a situaciones de conflicto armado en Georgia, la República de Moldova y Tayikistán, en que según las denuncias recibidas y no desmentidas, se habrían involucrado mercenarios de diversas nacionalidades. El informe incluyó una extensa comunicación de la Federación de Rusia en la que este Estado señala su preocupación ante el problema de los mercenarios y la iniciativa de legislación interna que ha adoptado, así como su voluntad para concertar acuerdos internacionales apropiados entre Rusia y los Estados vecinos. También se transcribió una comunicación del Gobierno de Ucrania, que expresa su grave preocupación por la utilización de mercenarios en la región, señalando que en el contexto de "carácter abierto" de las fronteras entre los miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), existen situaciones en que individuos y grupos transitan de un territorio a otro, sin conocimiento de las autoridades y participan en conflictos armados como mercenarios.

74. Todos los datos consignados en ese informe mantienen vigencia, ya que las tensiones internas y sobre determinación de fronteras y de pertenencia a Estados subsisten, a pesar de algunos acuerdos parciales de statu quo y modus vivendi y de cesación del fuego. Algunos Estados, como Georgia, han dado inicio a operaciones en gran escala de mantenimiento de la paz, a cargo de fuerzas de interposición de la Comunidad de Estados Independientes. El 4 de abril de 1994 se suscribió un Acuerdo de Cesación del Fuego en Moscú, que puso fin a 18 meses de guerra y en que se prevé el retorno de más de 250.000 refugiados georgianos expulsados de Abjasia. Otros, Moldova entre ellos, viven una situación de statu

quo en relación a la autoproclamada República de Transdniestro y la presencia de cosacos que actuaron como mercenarios contra la soberanía y la población de Moldova.

75. En otro escenario de grave conflicto armado, el que se desarrolla en Tayikistán, la presencia de mercenarios extranjeros consta en muchas denuncias que el Relator Especial transcribió al Gobierno de ese país con fecha 29 de julio de 1993, reiterándola el 2 de diciembre de 1993, sin que hasta el momento se haya producido una respuesta detallada sobre la cuestión de las denuncias presentadas. En todo caso, es importante recordar la adopción, en abril de este año, de un calendario para las negociaciones de reconciliación nacional, bajo el auspicio de las Naciones Unidas y con la presencia de observadores del Afganistán, Kazajistán, Kirguistán, la República Islámica del Irán, el Pakistán, la Federación de Rusia y la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa.

76. La segunda ronda de negociaciones, llevada a cabo en Teherán del 18 al 28 de junio de 1994, ha acordado una definición de la noción de cesación del fuego y de cesación de hostilidades que debe zanjar cuestiones tales como: cese de acciones militares, incluyendo violaciones de la frontera entre Afganistán y Tayikistán; operaciones ofensivas dentro del país, bombardeos de zonas cercanas a la frontera, ejercicios militares, reubicación de las formaciones militares regulares e irregulares en Tayikistán y Afganistán, emplazamiento de fuerzas de la Federación de Rusia y de fuerzas de mantenimiento de la paz de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), cese de actos terroristas, de bloqueos a ciudades, de ataques a instalaciones militares, industriales y a medios de comunicación; no utilización de estos medios para atacar o desprestigiar el proceso de reconciliación nacional, y no utilización de la religión ni de los sentimientos religiosos del pueblo. El período de negociaciones, ampliado hasta el 1º de octubre, comprenderá otros aspectos como la liberación de detenidos, el cese de los procesos judiciales en relación al conflicto, el levantamiento de la prohibición de actividades de los partidos políticos y el que se refiere a la prensa. Es evidente que en este contexto, el asunto de los mercenarios quedará también resuelto, puesto que se puede incluir en el punto que se refiere a formaciones militares irregulares. El conflicto civil en Tayikistán ha ocasionado hasta la fecha más de 20.000 víctimas mortales y 500.000 refugiados.

77. El Relator Especial está siguiendo con interés la cuestión planteada en Crimea, donde posiciones de reafirmación en torno a derechos nacionales y territoriales pueden desembocar en otro conflicto. La iniciación de un conflicto armado podría ocasionar la participación de grupos de diversa identidad nacional en operaciones de mercenarios. Esto debe evitarse y se deben agotar más bien las vías de negociación y del entendimiento político. Los casos de Georgia y de Tayikistán, a pesar de todas las reservas que pudieran merecer a algunos actores internos, son ejemplos de que la negociación y la reconciliación nacional son posibles.

VII. ESTADO ACTUAL DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA
EL RECLUTAMIENTO, LA UTILIZACIÓN, LA FINANCIACIÓN Y
Y EL ENTRENAMIENTO DE MERCENARIOS

78. La Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, aprobada por la Asamblea General mediante su resolución 44/34, de 4 de diciembre de 1989, debe entrar en vigor el trigésimo día a partir de la fecha de depósito del vigésimo segundo instrumento de ratificación o adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, en virtud de lo dispuesto por el párrafo 1 de su artículo 19. El Relator Especial debe necesariamente llamar la atención al hecho de la lentitud del proceso de expresión del consentimiento en obligarse por la Convención Internacional a través de la ratificación o la adhesión, pues hasta el momento sólo siete Estados han culminado dicho proceso: Barbados, que se adhirió a la misma el 10 de julio de 1992; Chipre, que depositó su instrumento de adhesión el 8 de julio de 1993; Maldivas, que la suscribió el 17 de julio de 1990 y la ratificó el 11 de septiembre de 1991; Seychelles, que se adhirió a la Convención el 12 de marzo de 1990; Suriname, que la suscribió el 27 de febrero de 1990 y la ratificó el 10 de agosto de dicho año; Togo, que depositó su instrumento de adhesión el 25 de febrero de 1991; y Ucrania, que la suscribió el 21 de septiembre de 1990 y la ratificó el 13 de septiembre de 1993.

79. Cabe también informar que otros 13 Estados han suscrito la Convención Internacional: Alemania (20 de diciembre de 1990), Angola (28 de diciembre de 1990), Belarús (13 de diciembre de 1990), Camerún (21 de diciembre de 1990), Congo (20 de junio de 1990), Italia (5 de febrero de 1990), Marruecos (5 de octubre de 1990), Nigeria (4 de abril de 1990), Polonia (28 de diciembre de 1990), Rumania (17 de diciembre de 1990), Uruguay (20 de noviembre de 1990), Yugoslavia (12 de diciembre de 1990) y Zaire (20 de marzo de 1990).

VIII. CONCLUSIONES

80. Es criterio de las Naciones Unidas considerar las actividades de mercenarios como ilegítimas y criminales, dado que su utilización ha servido para realizar actos contrarios al derecho internacional, configurando situaciones lesivas a la libre determinación de los pueblos, a la soberanía de los Estados, a la estabilidad constitucional de los gobiernos y a los derechos humanos de los pueblos afectados por esta actividad delictiva. En esta perspectiva, se han aprobado documentos internacionales que condenan y sancionan el reclutamiento, entrenamiento, financiamiento y la utilización de mercenarios, mientras que, según los datos registrados por esta Relatoría, son numerosos los Estados que han incluido en su legislación nacional tipos delictivos que podrían aplicarse para sancionar los actos mercenarios.

81. La condena del acto mercenario es un hecho universalmente aceptado, inclusive en aquellos Estados que todavía no lo han tipificado penalmente de manera específica. El estado actual de la discusión se refiere a la extensión y contenido del acto reprimible, pero no a su naturaleza delictiva. Por lo demás, y sin perjuicio del perfeccionamiento de los instrumentos jurídicos internacionales y de las disposiciones de la legislación nacional, los Estados Miembros debieran reforzar la capacidad de que disponen para formular políticas de prevención, seguimiento y sanción contra las actividades mercenarias. El

/...

aspecto de la prevención es fundamental y debiera incluir cuestiones como, por ejemplo, las que se refieren a la libre oferta laboral para la contratación de personas para actividades no especificadas. Este tema es muy delicado y debe ser sometido a estudio por cada país de acuerdo a las características del sistema económico constitucionalmente protegido. En todo caso, una supuesta contradicción entre la normativa constitucional y las normas internacionales no existiría. Si se considera que la actividad mercenaria es un delito, ésta no puede ser aceptada como expresión de libre contratación en el mercado.

82. Del mismo modo, los Estados tienen la capacidad de evitar que su territorio pueda ser utilizado para el entrenamiento, la concentración o el tránsito de mercenarios. Otro aspecto en que puede ser muy útil la acción del Estado es la adopción de medidas que impidan que sus sistemas y organismos financieros y económicos faciliten operaciones vinculadas a estas actividades ilícitas.

83. De acuerdo con la información acumulada, clasificada y analizada por esta Relatoría, la actividad mercenaria no se agota en la individualización del agente que comete el hecho delictivo. Este es el responsable de la ejecución de un acto ilícito. Pero la realidad demuestra que tras la contratación del mercenario y la ejecución de su acto, existe deliberación, planificación, organización, financiación y supervisión en la que intervienen terceros, que pueden ser grupos privados, organizaciones políticas de oposición, sectores que predicán intolerancia nacional, étnica o religiosa, organizaciones clandestinas, grupos paramilitares e incluso gobiernos que, a través de operaciones encubiertas, deciden una acción ilícita en perjuicio de otro Estado o contra la vida, la libertad, la integridad física y la seguridad de personas, implicando en la acción a mercenarios. La responsabilidad del acto mercenario alcanza al agente que ejecutó la acción criminal en su fase final, pero también a todos los que individual o colectivamente participaron en el acto ilícito de emplear mercenarios para la comisión de un delito. Se concluye por tanto que es muy importante la acción vigilante, así como el control y la prohibición expresa que los Estados Miembros dispongan en sus legislaciones internas para evitar que operen en su territorio organizaciones que generan actividades mercenarias y, si fuera el caso, anular cualquier dispositivo de inteligencia que a través de operaciones encubiertas, tolere la vinculación de agentes públicos que recluten mercenarios o lo hagan por intermedio de terceras organizaciones, disponiendo severas sanciones para este acto ilícito contractual.

84. Junto a la característica general establecida en la conclusión anterior, los motivos más usuales para el reclutamiento de mercenarios son la comisión de actos de sabotaje contra un tercer país, la realización de asesinatos selectivos contra personalidades, y la participación en conflictos armados. Se deduce por tanto que el mercenario es un delincuente criminal que, sin perjuicio de las sanciones a quienes lo contrataron y pagaron, debe ser severamente sancionado, de acuerdo a la tipología del delito común que ha cometido, cuando la legislación nacional no considere la figura autónoma del delito de mercenarismo. En todos los casos, la condición de mercenario debe ser considerada un agravante.

85. De acuerdo a las informaciones reunidas sobre mercenarios que participan en los conflictos armados internos o internacionales, debe considerarse la hipótesis de que podría estar influyendo en la actual oferta de mercenarios, la existencia de gente vinculada a oficios militares, cuya situación personal se ha

deteriorado por disminución de los efectivos o disolución de los cuerpos armados regulares a los que pertenecían y que, por consiguiente, no recibe remuneración.

86. Existen casos en que se apela a fórmulas jurídicas, o más específicamente, a procedimientos legales normales, para encubrir al mercenario. Así, éste puede aparecer con la identidad legal de nacional del país en cuyo conflicto armado se involucra, o donde cumplirá su encargo criminal, escapando de este modo a la calificación de mercenario. Aunque la utilización de este recurso oculta legalmente la condición real de mercenario de una persona, el origen de la relación contractual, la paga, el tipo de servicios pactados, el uso simultáneo de otras nacionalidades y pasaportes, y otros, debieran servir como pistas para establecer la nacionalidad verdadera de personas sobre las cuales existen fundadas sospechas de su mercenarización.

87. Todos estos hechos configuran el alcance y la magnitud de la actividad mercenaria como uno de los delitos que más dañan la libre determinación de los pueblos, la estabilidad constitucional, la paz y los derechos humanos. Se concluye por tanto, en la importancia del acuerdo de la Asamblea General adoptado en su resolución 48/92, de 20 de diciembre de 1993 (párr. 9), que recomienda reunir expertos, especialistas e interesados en el tema, que puedan contribuir al enriquecimiento de los conceptos, categorías, análisis y alternativas de solución contenidas en los informes que el Relator Especial ha presentado tanto a la Comisión de Derechos Humanos como a la propia Asamblea General. El hecho que por limitaciones presupuestales el Centro de Derechos Humanos no haya programado esta actividad para el año 1994, no debiera impedir el que se mantenga este punto como una actividad que efectivamente sirva a enriquecer y establecer recomendaciones prácticas para las propuestas contenidas en los informes del Relator Especial.

88. Las informaciones acumuladas permiten sostener que en el curso de los últimos años, varios países africanos han sufrido actividades de mercenarios. Es preciso recordar al respecto que el concepto de mercenario, en su acepción contemporánea, tomó como punto de partida la presencia de profesionales de la guerra, que actuaron en cruentos conflictos armados en diversas regiones de África para impedir el ejercicio del derecho a la libre determinación, la independencia y la formación de Estados soberanos africanos, así como para formar enclaves territoriales dependientes de las antiguas metrópolis, o para imponer gobiernos sumisos a éstas o a las empresas colonialistas. Algunos de los conflictos fueron resueltos, y en tal sentido disminuyeron las actividades mercenarias. Pero éstas no han desaparecido totalmente. Angola, Benin, Botswana, las Comoras, Lesotho, Liberia, Mozambique, Namibia, Zaire, Zambia y Zimbabwe, entre otros, fueron países donde hubo actividad mercenaria, y en algunos casos, fuera de la región del África meridional surgieron agresiones de mercenarios debido a la política del apartheid originada en Sudáfrica, pero con ramificaciones y actividades criminales en África e inclusive fuera de este continente.

89. Durante el primer semestre de 1994 la situación en Angola ha continuado agravándose, habiendo fracasado los intentos para retomar la vía trazada por los Acuerdos de Paz suscritos el 31 de mayo de 1991. La información reunida permite concluir que los efectos de esta guerra son para la población angoleña aún peores que los sufridos hasta 1991. Las condiciones de vida se han deteriorado al punto de generarse situaciones de hambruna; el número de muertos se estima en

/...

más de 1.000 por día y se calcula en aproximadamente 200.000 el número de personas muertas desde el reinicio de la guerra. Los esfuerzos de las Naciones Unidas para disminuir el sufrimiento del pueblo angoleño y lograr que cese el conflicto no han tenido un resultado positivo hasta la fecha. En este contexto, es importante la resolución 864 (1993) del Consejo de Seguridad, adoptada por unanimidad el 15 de septiembre de 1993, bajo los términos del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, estableciendo un embargo de armamento, material de guerra y petróleo aplicable a las fuerzas de la UNITA. No obstante, es preciso señalar que a comienzos de diciembre de 1993, la UNITA anunció su disposición para negociar una tregua y reiniciar el diálogo con el Gobierno. Lamentablemente las conversaciones fracasaron, incrementándose una vez más el conflicto militar. En los meses de junio y julio de 1994 ambas partes en el conflicto han lanzado ofensivas para asegurar el control de las zonas que están en su poder y atacar las que están en poder del adversario. Así las cosas, la guerra amenaza con continuar indefinidamente, retrasando las perspectivas de una negociación de paz exitosa.

90. Con relación a las actividades mercenarias generadas en Sudáfrica dentro del contexto de la política de apartheid, que ha tenido como escenario tanto ese país como otros de la región e inclusive de fuera de ella, el informe señala la disminución sustantiva de tales actividades mercenarias, al mismo tiempo que se desmantela progresivamente el apartheid. Además, la realización en abril de este año de las primeras elecciones multirraciales y democráticas, donde fue elegido Presidente Nelson Mandela, permite augurar el inicio de un proceso que consolide la democracia y el pleno respeto a los derechos humanos en Sudáfrica. En la continuación de este proceso es de esperar que la resistencia presentada por algunos grupos extremistas de la minoría blanca, que inclusive han apelado a la contratación de mercenarios para organizarse militarmente y recibir instrucción militar, sea controlada y que además se puedan investigar y sancionar los crímenes cometidos por funcionarios, agentes estatales, civiles o militares, mercenarios y paramilitares contra la población negra de Sudáfrica y de países vecinos.

91. El presente informe ha recogido y ampliado la preocupación del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Rwanda, que apareciera como una referencia en sus informes de 1992 y 1993. Dentro del grave deterioro que sufre ese país y que ha ocasionado la muerte de más de 500.000 rwandeses y el sufrimiento de toda la población, el presente informe ha puesto particular énfasis en la necesidad de investigar exhaustivamente el atentado criminal contra el avión en el que viajaban los Presidentes de Rwanda y de Burundi y que ocasionó la muerte de ambos. Aun cuando sería prematuro establecer cualquier conclusión, no pueden quedar sin estudio las denuncias, los comentarios, los rumores con eco en la prensa internacional sobre la posible autoría de dos mercenarios extranjeros como principales responsables de este atentado que fue el que desencadenó las matanzas con características genocidas.

92. A diferencia de los informes precedentes, este informe no contiene mayor información sobre los conflictos armados en el territorio de la ex Yugoslavia. En lugar de esos datos se ha dado importancia a la correspondencia y las alegaciones recibidas de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) y de la República de Croacia, sobre la presencia de mercenarios. El Relator Especial prevé realizar una visita de misión a ambos países en la segunda quincena del mes de septiembre de este año. Una vez finalizada esa

visita, hará un adelanto de los resultados de dichas misiones en la presentación oral de este informe ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, sin perjuicio de un tratamiento más extenso en los próximos informes escritos.

93. A consecuencia del desmembramiento de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, las repúblicas que antes formaban parte de este Estado se han convertido en Estados soberanos e independientes, que en su mayor parte han conformado la Comunidad de Estados Independientes (CEI). En algunos de esos países han surgido desavenencias de diversos tipos, unas que se refieren a cuestiones de fronteras, y otras a relaciones internas entre territorios y repúblicas y a su régimen de autonomía respecto del nuevo Estado. Pero los desacuerdos que se han convertido en conflictos de tipo armado son principalmente aquellos donde han intervenido un elemento de tipo étnico y un sentimiento nacionalista o religioso acendrado, que han actuado como catalizadores de opciones en favor de una mayor autonomía, de la reformulación territorial para pasar de un Estado a otro Estado, o para cambiar la naturaleza del régimen político. En todos los casos en que el atolladero se ha convertido en conflicto armado, se habría producido una participación de mercenarios, según la información analizada por el Relator Especial. El presente informe se refiere especialmente al conflicto de Nagorno-Karabaj, donde se confrontan principalmente las fuerzas de Azerbaiyán con las armenio-karabajíes, por el control de dicho enclave. Como se sabe, las denuncias sobre la participación de mercenarios en este conflicto han sido múltiples. Una reciente comunicación del Gobierno de Azerbaiyán hace una pormenorizada referencia de estas actividades en asociación con las fuerzas armenio-karabajíes. Los intentos de paz han fracasado hasta el momento. En cambio las soluciones halladas para los conflictos de Georgia, de la República de Moldova, como en el proceso iniciado en Tayikistán, conflictos donde las denuncias sobre presencia de mercenarios han sido numerosas, demuestran que por la vía de la negociación política es posible llegar a acuerdos realistas que garanticen la paz y las buenas relaciones en todos los Estados conformantes de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

94. Con relación al estado actual de la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, el Relator Especial señala que hasta el momento sólo siete Estados han culminado el proceso para ser parte en la Convención (Barbados, Chipre, Maldivas, Seychelles, Suriname, Togo y Ucrania), mientras que otros 13 Estados se han suscrito a ella. En estas condiciones se concluye que hay un retraso en el proceso de expresión del consentimiento de los Estados Miembros para obligarse con la Convención, a través de la ratificación o la adhesión, pues mientras no cuente con la ratificación o adhesión de 22 Estados, la Convención no puede entrar en vigor.

IX. RECOMENDACIONES

95. El Relator Especial, ante la constatación de que las actividades mercenarias no han disminuido, hecho que afecta los derechos humanos y el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, y teniendo en cuenta las declaraciones y resoluciones de las Naciones Unidas que condenan estas actividades, a las que califican de delitos graves que inquietan profundamente a todos los Estados, recomienda a la Asamblea General que renueve la condena a todo tipo, modalidad y nivel de actividades mercenarias, así como a

/...

los Estados o terceros que se involucran en ellas, señalando al mismo tiempo la necesidad de reforzar los principios de soberanía, igualdad e independencia de los Estados y la libre determinación de los pueblos, así como el pleno respeto y disfrute de los derechos humanos y de la estabilidad de los gobiernos constitucionalmente establecidos y legítimamente en funciones.

96. Teniendo en cuenta que la acción mercenaria se expresa principalmente en contextos de conflicto armado, pero no exclusivamente, puesto que también se han llevado a cabo operaciones mercenarias sin que exista conflicto armado de por medio, se recomienda que la Asamblea General señale que es el uso en sí de mercenarios y su empleo para actividades ilícitas lo que es motivo de condena, tanto si realizan estas actividades una o todas las partes en un conflicto armado, como si no existiendo éste, se apela a mercenarios para lesionar la libre determinación de un pueblo, generar daño a las instalaciones materiales de un país, desestabilizar al gobierno constitucional de un Estado o atentar contra la vida y seguridad de sus habitantes.

97. Tomando en cuenta la naturaleza, modalidades, relaciones contractuales y características específicas que concurren para las actividades mercenarias, el Relator Especial sugiere que se incluya en la resolución de condena a estas actividades, la recomendación a los Estados Miembros de establecer en sus legislaciones internas la prohibición expresa de que operen en su territorio organizaciones vinculadas a mercenarios, o que realicen actividades contractuales respecto de ellas, así como de propaganda y promoción pública de los paramilitares y los mercenarios. Asimismo, prohibir que las autoridades públicas apelen a ese recurso y anular cualquier dispositivo de inteligencia que, a través de operaciones encubiertas, utilice mercenarios o lo haga por intermedio de terceras organizaciones.

98. Dado el excedente de personas de profesión militar que se vinculan al mercado de mercenarios y el uso de fórmulas jurídicas y de procedimientos legales para disfrazar la identidad legal y la nacionalidad del mercenario o la utilización simultánea de la doble o múltiple nacionalidad, se recomienda que la Asamblea General reitere el acuerdo adoptado en su resolución 48/92, de 20 de diciembre de 1993, en el párrafo que contiene el aspecto referente a una reunión de expertos, especialistas e interesados en el tema, para que conjuntamente con el Relator Especial avancen en proposiciones de solución destinadas a la drástica reducción de este problema.

99. África sigue siendo el continente más afectado por actividades de mercenarios que persisten en algunos conflictos de la región, manteniéndose como un peligro latente para otros países de ese continente. Se recomienda por tanto, que la Asamblea General reafirme su enérgica condena a la presencia de mercenarios y a los Estados y terceros que fomentan tales actividades en África, reiterando al mismo tiempo el respaldo irrestricto a la libre determinación, al desarrollo y al pleno disfrute de los derechos humanos de los pueblos africanos, señalando también su respaldo a las medidas que se adopten, conforme al derecho internacional y a las leyes internas, en el caso de países afectados por la presencia de mercenarios.

100. En refuerzo de la recomendación anterior y teniendo en cuenta que la eliminación del régimen del apartheid en Sudáfrica y la instalación de un régimen democrático y de integración multirracial en ese país puede favorecer la

reducción de las actividades mercenarias, se recomienda un respaldo a las iniciativas destinadas a la expulsión de los países africanos de todas las personas de nacionalidad extranjera que han actuado como mercenarios en conflictos armados o a propósito del apartheid, hayan o no cumplido condena, y que al mismo tiempo los nacionales incurso en actos de mercenarismo sean prevenidos por disposiciones legales que señalen la reincidencia como un agravante sancionable con la mayor severidad del respectivo régimen legal de cada país.

101. Teniendo en cuenta la continuación durante el primer semestre de 1994 del conflicto armado en Angola, se recomienda que la Asamblea General señale el grave perjuicio que para el pueblo angoleño y para el respeto y goce de sus derechos humanos significa la prolongación del conflicto, indicando al mismo tiempo la necesidad de ponerle fin, en el contexto de los acuerdos de paz y de las iniciativas contenidas en las resoluciones de las Naciones Unidas y de la OUA. La recomendación se extiende a la necesidad de condenar enérgicamente la presencia de mercenarios que en territorio angoleño o desde países vecinos, se han involucrado en el conflicto armado.

102. Considerando que el régimen del apartheid ha sido eliminado en Sudáfrica y que se han realizado en dicho país elecciones democráticas y multiétnicas, en las que por primera vez participaron 27 millones de sudafricanos, se recomienda que la Asamblea General exprese una vez más su respaldo al proceso de democratización en Sudáfrica, en cuyo contexto debe cesar la presencia de mercenarios en ese país que actuaban al amparo y en favor del régimen del apartheid. Al mismo tiempo, la resolución debería condenar las acciones de violencia armada que propician los grupos minoritarios de resistencia afrikaner y estimular la investigación y sanción a los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos para fortalecer el apartheid, evitándose la impunidad.

103. Teniendo en cuenta la grave situación producida en Rwanda y las masacres con características genocidas que han convertido en víctimas a cientos de miles de habitantes de ese país, se recomienda que junto a las iniciativas de paz, de ayuda humanitaria, de cooperación y de asistencia a la reconstrucción de ese Estado, se considere también la conveniencia de una fórmula que, reforzando las atribuciones de la Comisión de Expertos nombrada por el Secretario General, así como a través de los mecanismos de los organismos del sistema especializados en derechos humanos, se investiguen exhaustivamente los crímenes cometidos en Rwanda y especialmente el atentado del 6 de abril de 1994 al avión en el que viajaban los Presidentes de Rwanda, Sr. Juvenal Habyarimana y de Burundi, Sr. Cyprien Ntaryamira, que murieron en dicho atentado. Este ocasionó masacres en las que perdieron la vida cientos de miles de rwandeses. Como se ha señalado en el informe, la posibilidad de la participación de dos mercenarios extranjeros en la comisión del atentado debe ser exhaustivamente investigada.

104. En relación a los conflictos armados que surgieron en algunos de los Estados que formaban parte de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de los que el de Nagorno-Karabaj y el de Tayikistán se mantienen en actividad, y en adición a las iniciativas en favor de la paz en esa vasta región, se recomienda que la Asamblea General condene expresamente el uso de mercenarios por cualquiera de las partes en los conflictos armados que aún continúan y en las que ya han acabado total o parcialmente, debiendo incluirse en la

recomendación el llamado a todos los Estados de la región para que incorporen en su legislación penal la tipificación de la actividad mercenaria, así como para que apliquen las medidas de penalización a quienes han estado actuando como mercenarios, sea en forma individual o formando grupos paramilitares irregulares.

105. Por último, en relación a la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, el Relator Especial recomienda que se sugiera a los Estados que aún no la han ratificado o manifestado su adhesión, que evalúen la conveniencia de acelerar ese proceso, lo cual contribuirá a una acción más eficaz de la comunidad internacional para prevenir, perseguir y sancionar las actividades de los mercenarios, y coadyuvará a la observancia de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
